



UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS FORENSES

No. 11 — Año 8 - Mayo 2019 - Octubre 2019



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Universidad Metropolitana
de Educación, Ciencia y Tecnología
UMECIT**

CATHEDRA

**No. 11 – Año 7
Mayo 2019 – Octubre 2019**

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

MISIÓN

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

VISIÓN

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: www.umecit.edu.pa

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: cathedra@umecit.edu.pa

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. José Alberto Nieto Rojas
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa

Dr. Eduardo Atencio Bravo
Vicerrector Académico

Dra. Magdy De las Salas
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Mauricio Sierra
Director Académico

Dra. Merling Flores
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro
Secretaria General

REVISTA CATHEDRA

EQUIPO EDITORIAL

EDITORIA:

Dra. Magdy De las Salas Barroso
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

COEDITOR:

Mgter. Gino Osellame
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT
ginosellame@yahoo.com

COMITÉ EDITORIAL:

Dra. Ana Emérita de Villalaz
Profesora emérita de la Universidad de Panamá
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

ÍNDICE

Gino Osellame

Presentación de la edición.....	6
--	----------

José Alberto Nieto Rojas

Editorial.....	10
-----------------------	-----------

Rosa María Aguirre Donadío, Panamá

Responsabilidad civil derivada de contrato de construcción, de obras no terminadas.....	11
--	-----------

Elías Domínguez, Panamá

Aspectos regulatorios del Mercado de Valores

Medios excepcionales de terminación de un procedimiento sancionador.....	17
---	-----------

Iván Estribí del Pino, Panamá

De las medidas de protección y medidas cautelares en la investigación penal en el delito de violencia doméstica.....	25
---	-----------

Guillermo Barría Vargas, Panamá

La prueba pericial como elemento probatorio en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.....	36
--	-----------

Tiara Villarreal, Panamá

La contratación pública, como especialidad de estudio jurídico.....	53
--	-----------

Normas de publicación de la Revista.....	60
---	-----------

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN



Gino Osellame R.

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Panamá
Abogado y docente universitario
Coeditor de la Revista Cathedra
ginoosellame@yahoo.com

Una de las situaciones históricas, que más ponen en riesgo el Estado de Derecho y el orden normativo, viene representada por las crisis que se desata en materia económica, dentro de una sociedad determinada.

Sin importar que sus casusas sean endógenas, producto de la mala administración de la cosa pública, o exógenas, como la inflación por aumento de costos en mercados internacionales, el resultado es el mismo. El individuo pierde poder para saciar sus necesidades.

Las desigualdades e iniquidades en sociedad, se acentúan en tiempo de crisis económica. Esta sobrecarga dimensional desata una reacción en cadena, que afecta puntualmente, el acceso limitado o carente a bienes y servicios comunes.

Por su parte el Estado al disminuir su capacidad de endeudamiento, agota sus recursos presupuestarios, y desiste de atender funciones públicas importantes, como salud, educación, vivienda, seguridad y desarrollo productivo. En adición, funciones públicas ordinarias, se tornan deficientes y repercuten negativamente, sobre la sociedad, sesgando el acceso a los servicios más elementales.

La sociedad con sus sistemas de organización colectiva, sean asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, sociedad civil, asociaciones religiosas, incluso organizaciones criminales, y otras de cualquier naturaleza, tratarán de resolver sus desiguales necesidades, buscando crear su orden propio, con el fin de garantizar mecanismos para acceder a lo que el Estado no les garantiza o provee.

Consecuentemente, sobreviene el distanciamiento de los intereses materiales del Estado en contraposición de los intereses reales de la sociedad, y el ciudadano no solo pierde afinidad con la administración pública, sino que desaparece la voluntad de aceptar las reglas de derecho, sin temor

a las consecuencias, por concebirse víctima de la incompetencia administrativa.

Frente a este escenario, yace la pérdida de poder real del Estado, sobre sus administrados. Un ejemplo somero, es la evasión fiscal, justificada bajo la afirmación cultural, de no pagar tributos, porque el Estado es deficiente y quienes gobiernan, derrochan los recursos públicos.

Esta coyuntura, provoca que el orden social bifurque estructuralmente, su modelo de organización en base a desigualdades, que compiten por imponerse. Uno, mediante organizaciones sociales que jerárquicamente se someten de forma jacobina al Estado y a sus componentes de administración, a saber, normas de rangos constitucionales y ordinarias, que le brinden legitimidad y sistematice su forma de liar con el poder.

Y, un segundo modelo de índole fáctico, sostenido por colectividades reconocidas oficialmente o no, que tienen como finalidad conquistar los espacios que el Estado ha descuidado.

Las organizaciones de facto sin control, muchas veces surgen de la complicidad de la administración pública y los particulares. Conseguir decisiones judiciales favorables, o adjudicar licitaciones, son ejemplo de esta relación. Pero sobre todo surgen, de las desigualdades sociales, así, bandas delincuenciales, terminan criando menores de edad y ganando soldados, para la obtención de sus objetivos.

El impacto de la economía, en la voluntad colectiva, de cumplir con las normas vigentes, es simétricamente proporcional, a la responsabilidad del Estado para conservar la integridad de las leyes, entre eficiencia en la gestión pública y tutela de intereses colectivos. El abuso de este equilibrio, desestima la existencia de los sistemas jurídicos y el deber ser del ciudadano en sociedad, y es lo que se conoce como Estado fallido.

La Revista Cathedra de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), publica artículos producto de la investigación científica en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas y forenses; tiene como objetivo fundamental, brindar mayores luces a profesionales de las ciencias jurídicas y de las ciencias forenses, así como a estudiantes de esta noble academia de educación superior, en temas variados como del derecho al consumidor, derecho de trabajo, derecho procesal, derechos humanos y ciencias penales.

Sirva entonces, esta reflexión, sobre el rol de los jueces y la teoría de las garantías fundamentales, para presentar en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación

y Tecnología (UMECIT), la Edición 11, año 7, de la Revista Cathedra, correspondiente a .

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, en donde plantea la intención de UMECIT de aunar esfuerzos para ofrecer una publicación donde se respeten las preferencias ideológicas y políticas, donde se reconozca la pluralidad, el diálogo, la discrepancia, los aportes de expertos y nóveles investigadores, sobre la base de un pensamiento amplio y a veces divergente, compromiso social y la firme intención de aportar en un área tan sensible.

Esta nueva publicación, tiene la oportunidad de contar con el conocimiento y experiencia, de la jurista y profesora universitaria, **Rosa María Aguirre Donadío**, con el tema intitulado **RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS NO TERMINADAS**. Tema de mayor actualidad, frente al desarrollo inmobiliario, que en el último decenio, se ha desarrollado en la República de Panamá. Propone en dicho artículo, una serie de recomendaciones, para la protección de derechos de la parte más afectada en el contrato de construcción, que es el comprador.

Por su parte, el jurista **Elías Dompínguez**, nos trae el tema, denominado: **ASPECTOS REGULATORIOS DEL MERCADO DE VALORES**, con el que explica en materia de regulación, cómo el proceso de sanción por violación al contenido de del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 “Ley del Mercado de Valores”, puede ser objeto de métodos alternos de solución de conflicto, mediante mecanismos nítidamente expuestos y explicados en este artículo jurídico.

El conocido fiscal, **Iván Estribí Del Pino**, nos brinda un interesante tema en materia penal, que se intitula **DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, EN EL DELITO DE VIOLENCIA DOMESTICA**. Nos deja saber el letrado, cuáles son las medidas dentro del Sistema Penal Acusatorio, que son impuestas a los infractores, así como también detalla de forma ejemplar, los requisitos y condiciones, para la petición y concesión de medidas cautelares.

Seguidamente, colabora en esta publicación, **Guillermo Barria Vargas**, abogado litigante, quien realiza una interesante y complejo análisis, con su tema: **LA PRUEBA PERICIAL COMO ELEMENTO PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**. En este artículo, se extraen y analiza el valor procesal de las pruebas periciales, siendo la reina de las pruebas dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Finalmente, contamos con un interesante aporte en Derecho Administrativo, con el artículo **LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, COMO ESPECIALIDAD DE ESTUDIO JURÍDICO**, redactado de forma brillante, por la Licenciada **Tiara Villarreal**, quien afirma que la transparencia, es el pilar fundamental de las contrataciones públicas, y es el mismo ciudadano quien debe convertirse, al amparo de las normas, en el principal veedor de las mismas.

EDITORIAL



José Alberto Nieto

Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Panamá
rectoria@umecit.edu.pa

Como Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología me complace presentarles este nuevo número de nuestra revista de Derecho y Ciencias Forenses, CATHEDRA. Para UMECIT es un compromiso permanente poder tener activas nuestras revistas científicas como aporte a la sociedad del conocimiento.

La investigación en esta área del saber es sumamente importante. Ponerse en contacto con la realidad de los hechos e indagar sobre todos los elementos implícitos en la praxis jurídica y forense, son actividades que caracterizan a estos profesionales.

Son muchos los cambios que a nivel jurídico se han experimentado en los últimos años. Interesantes ajustes y nuevas incorporaciones legales en temáticas que trascienden lo local, obligan a los especialistas del área a realizar exhaustivos análisis y procesos de investigación.

UMECIT ha venido realizando actividades permanentes para el desarrollo de capacidades científicas en docentes y estudiantes, que les permitan aportar en estos importantes espacios y trascender fronteras. Esa es parte de nuestra contribución a la investigación desde la academia.

Pretendemos aunar esfuerzos para ofrecer una publicación donde se respeten las preferencias ideológicas y políticas, donde se reconozca la pluralidad, el diálogo, la discrepancia, los aportes de expertos y nóveles investigadores, sobre la base de un pensamiento amplio y a veces divergente, compromiso social y la firme intención de aportar en un área tan sensible.

Gracias a las plumas que engalanan esta edición No. 11. Esperamos que sea de aporte y enriqueciendo profesional para nuestros lectores.

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS NO TERMINADAS



Rosa María Aguirre Donadío
Abogada y docente universitaria
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Panamá
rmaguirre@castillonieto.com

Fecha de recepción: 05/05/2019

Fecha de revisión: 10/06/2019

Fecha de aceptación: 21/07/2019

RESUMEN

El presente escrito constituye únicamente un llamado de atención acerca de una situación o práctica que no es nueva, sino que ya podría considerarse como veterana. Necesitamos encontrar e implementar los mecanismos legales que protejan efectivamente los intereses de los que han invertido sus dineros en proyectos inmobiliarios fallidos. La aparente quiebra de las empresas promotoras nuevas y la dificultad para encontrarles bienes secuestrables a las empresas promotoras de larga data, descaradamente vinculadas a las nuevas que resultaron insolventes, deberían actuar como una luz roja de peligro, tanto para los entendidos como para los incautos compradores.

Palabras clave: Permisos municipales, incumplimiento de contrato, responsabilidad civil

LEGAL SUGESSTIONS OVER CIVIL LIABILITY FOR BUILDINGS THAT NEVER GET BUILT

ABSTRACT

The present article is an attention call over an old edification practice. We need to find and implement legal procedures to protect the economic interest of whom had invested in building projects that never get built. The apparently bankrupt of new construction companies, and the strong difficulty finding assets for seizure or legal kidnapping, from the old stablished properties companies with connections with the ones in bankrupt, should represent a red alert light to those involved in this activity, especially if it is a buyer.

Key Words: Municipal permits, breach of contract, civil liability

Presentación del problema

¡Cuántas veces nos hemos deleitado mirando la publicidad que aparece en las revistas especializadas en inmuebles y en programas de la televisión! Nos deslumbran las formas de las estructuras, los diseños de los espacios y la decoración modelo. Pensamos, que vale la pena el esfuerzo de adquirir un préstamo hipotecario. Todo por una nueva vivienda, bien ubicada, con diseños modernos, área social, y en general, un proyecto muy atractivo.

El protagonista imaginario de este panorama, también quedó cautivado por uno de estos anuncios. Decidió que compraría un apartamento para sus padres y otro para él y su familia. Acudió al banco, adelantó los trámites pertinentes, y comenzó a pagar el abono inicial, todo ello antes de que el edificio elegido se hubiese empezado a construir. Después de todo, comprar en pre-venta es sinónimo de un mejor precio.

Los meses fueron pasando, mientras su presupuesto se encontraba comprometido; pero nuestro protagonista lo asumía esperanzado en un mejor futuro. De repente, un día cualquiera, le comunica la promotora que, por causas ajenas a su voluntad, el edificio no podría ser construido.

El mundo se le derrumbó en un instante. Después de llorar, gritar, maldecir y otras cosas, consideró que era posible reclamar los abonos realizados hasta ese momento; ya que así lo decía una cláusula del contrato de promesa de compra-venta, y también la ley (Código Civil). Entonces, se dirigió a la empresa promotora /constructora a reclamar lo que es justo y, lo enredaron con papeles y le dieron largas para, finalmente, no devolver los abonos.

Desesperado, se le ocurrió demandar judicialmente, aunque sabía que parte del dinero que recobrarse se destinaría a los honorarios del abogado; sin embargo, esa era la única forma de recuperar, aunque sea, una parte de su inversión.

Interpuesta la demanda en el juzgado, el abogado le informa que la compañía constructora cerró operaciones o se encuentra en quiebra. También le dice que no ha podido ubicar bienes a nombre de la compañía promotora que puedan ser secuestrados. Por añadidura, todas las fotos publicitarias del fallido proyecto han sido retiradas de los medios. Pareciera que nunca hubo una propuesta al público.

Mientras tanto, los verdaderos involucrados en la construcción y mercadeo del edificio soñado de esta historia, ríen y se sienten satisfechos porque, una vez más, su astucia los ha favorecido y les ha evitado tener que destinar grandes sumas de dinero en concepto de devolución de abonos.

Su maravillosa idea de crear sociedades especiales, con limitados fondos propios, para ciertos proyectos dudosos, los ha librado, a ellos y a su gran compañía de bienes raíces, de enfrentar pérdidas cuantiosas. La receta ha sido tan exitosa que la repiten cada cierto tiempo. Estos sagaces promotores, comen a menudo en Hacha y se desplazan por el país, en cómodos carros y helicópteros, haciendo inventario de sus múltiples propiedades (que no aparecen inscritas bajo sus nombres).

Sin embargo, para nuestro personaje imaginario, quien creyó en la honestidad y experiencia de la promotora, que invirtió sus ahorros y se endeudó, el futuro no luce bien. Ahora, él continúa endeudado, pero no tiene sus apartamentos, y al parecer, nunca los tendrá. ¡Qué ironía! La familia de los promotores, según el mismo promotor le expresó al abogado, tiene asegurado su futuro hasta más allá de la muerte de sus descendientes; pero los compradores de clase media, o inmigrantes con pocos recursos, no tienen garantía ni para unos cuantos meses o años más.

Situación jurídica actual

La culpa no es de la Ley, ya que Panamá cuenta con excelentes normas que regulan a la actividad de la construcción, entre ellas, el Acuerdo Municipal No.281 de 6 de diciembre de 2016 y la Ley 6 de 2006 modificada por la Ley 14 del 2015.

El Acuerdo Municipal No.281, que cuenta con el carácter de ley dentro del municipio que lo expidió, contiene los requisitos que se exigen para la solicitud y obtención de los permisos de ante-proyecto, de construcción y de ocupación.

Al respecto, citaremos los artículos 10, 12 y 13 del Acuerdo 281 de 2016, en referencia al permiso de Ante-Proyecto para la construcción.

El artículo 10 dice así:

“Para la obtención del permiso de construcción de obras dentro del Distrito de Panamá, el interesado deberá someter, según el proyecto, un Ante Proyecto previo al plano de la obra por realizar”

El artículo 12, en sus párrafos 2 y 3, dice así:

“Queda entendido que el Ante Proyecto aceptado NO autoriza al profesional, a la empresa constructora, propietario o promotor a iniciar la obra.”

“El Ante Proyecto aceptado permitirá celebrar contratos de promesa de compra-

venta o contratos de arrendamiento con opción de compra de lotes en proyectos de parcelación, urbanización y edificaciones, así como anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos de parcelaciones, urbanizaciones y edificaciones.”

Si le damos la vuelta al último párrafo transcrito, se entiende, claramente, que no es legalmente posible, publicitar, por cualquier medio, una obra de edificación, si antes no se cuenta con un permiso de Ante Proyecto aprobado por la Dirección de Obras y Construcciones de Municipio de Panamá (DOYC), para el cual, entre otras cosas, se debe demostrar que se cumple con las normas de ordenamiento territorial y uso de suelo, lo cual incluye, también, a los servicios básicos, tales como suministros de electricidad, agua potable, aceras, calles, vías de acceso, tuberías de acueductos y alcantarillados del diámetro suficiente; así como estudios de impacto ambiental, entre otros.

Continuando con los requisitos exigidos por el Municipio de Panamá, el artículo 13 del Acuerdo 281 de 2016, dice así:

“El solicitante de una revisión de Ante Proyecto deberá:

- 1. Entregar a la DOYC una copia del anteproyecto.*
- 2. Presentar certificado del registro de propiedad emitido por el Registro Público de Panamá.*
- 3. Presentar copia de los planos de anteproyecto y Resolución de su aceptación de anteproyecto otorgada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).*
- 4. Completar formulario elaborado por la DOYC el cual deberá ser completado en su totalidad indicando el valor total de la obra, para su tramitación, revisión y registro.”*

Producto de la investigación llevada a cabo por nuestro protagonista, se llegó a descubrir que la promotora del edificio contentivo del apartamento ideal, nunca solicitó el permiso de Ante Proyecto.

Las normas sobre el tema establecen que la Dirección de Obras y Construcciones Municipales de Panamá, debe enviar periódicamente al Consejo Municipal una lista de los Ante-Proyectos que han sido debidamente aprobados. El propósito de ello radica en la función de la Junta Comunal como representante de los intereses de las personas habitantes del municipio respectivo.

En este mismo sentido, el nuevo Acuerdo No.131 de 23 de julio de 2019 del Municipio de Panamá, establece en su artículo 8, literal d) la obligación de elaborar informes mensuales de los

anteproyectos aceptados en a DOYC para su debida divulgación en los medios establecidos; y en el literal e) se establece la obligación de localizar en el mapa los anteproyectos aceptados para su geo-referenciación.

Como se puede observar, las disposiciones legales existen y constituyen una ayuda para todo aquel que desee comprar un inmueble en pre-venta. No obstante, pareciera que hace falta un poco más de divulgación al público para que la gente conozca todas estas ventajas y se beneficien de ellas.

Sería excelente si, adicionalmente a las listas y/o informes, las autoridades designasen un equipo de monitoreo para verificar que cada anuncio inmobiliario que se publicite, por cualquier medio, cuenta con los permisos correspondientes. Esta información es por ley de acceso público (transparencia); por lo que se debería poner más empeño en su implementación.

Sobre la Responsabilidad Civil

Las garantías sobre responsabilidad civil para las construcciones se concentran en los vicios ocultos y otros incidentes o accidentes a causa de la construcción; pero en el caso de nuestra historia nunca hubo una construcción. Lamentablemente, los requisitos que se requieren para la aprobación del Ante Proyecto, no contemplan la exigencia de una garantía financiera (seguro de responsabilidad civil) para el caso de que el proyecto publicitado no logre iniciar la etapa de construcción.

Adicionalmente, en el supuesto del que habla este artículo, la promotora ni siquiera llegó a obtener el Permiso de Ante Proyecto, lo cual significa que no estaba autorizada legalmente para hacer ningún tipo de publicidad sobre dicho proyecto inmobiliario. En otras palabras, el hecho de que la promotora hubiese aceptado dineros en calidad de abonos, en base a un contrato de promesa de compra-venta, que no contaba con la aprobación del Ante-Proyecto por la DOYC, se acerca peligrosamente a la figura de la estafa, la cual se encuentra tipificada en nuestro Código Penal.

Conclusiones

El presente escrito constituye únicamente un llamado de atención acerca de una situación o práctica que no es nueva, sino que ya podría considerarse como veterana. Necesitamos encontrar e implementar los mecanismos legales que protejan efectivamente los intereses de los que han invertido sus dineros en proyectos inmobiliarios fallidos. La aparente quiebra de las empresas promotoras nuevas y la dificultad para detectarles bienes a las empresas promotoras de larga data, descaradamente vinculadas a las nuevas empresas que resultaron insolventes, deberían actuar como

una luz roja de alerta para los incautos compradores.

Sugerencias

Ante el panorama planteado, nos atrevemos a sugerir que se modifique la norma para exigir, como uno más de los requisitos que se solicitan para obtener el permiso de Ante Proyecto (art.13 del Acuerdo 281 de 2016), la presentación de una póliza de responsabilidad civil u otro tipo de respaldo económico o fondo fijo para hacer frente a las demandas provenientes de los promitentes compradores, en el evento de que la construcción no se inicie o se trunque prematuramente. La cuantía de dicha garantía financiera debería ir en proporción al valor de cada contrato de promesa de compra-venta que se firme, ya sea que se establezca una cantidad alzada desde el principio, o que la suma asegurada inicial se vaya incrementando en la medida en que se vayan firmando más contratos de promesa de compra-venta. Obviamente, todo esto deberá ir acompañado de una adecuada supervisión del cumplimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuerdo No.131 de 23 de julio de 2019, que establece la nueva estructura organizativa y se dictan las funciones de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá. Gaceta Oficial No.28844, de 22 de agosto de 2019.
- Acuerdo Municipal No.281 de 6 de diciembre de 2016 y sus anexos, que regulan la revisión y registro de los documentos para la construcción y los permisos para las nuevas construcciones. Publicada en Gaceta Oficial No. 28194-B, de 11 de febrero de 2017.
- Ley 6 de 1 de febrero de 2006, sobre ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. Publicada en Gaceta Oficial No.25478, de 3 de febrero de 2006.
- Decreto Ejecutivo No. 23 de 16 de mayo de 2007, que reglamenta a la ley 6 de 2006. Publicada en gaceta Oficial No. 25794, de 24 de mayo de 2007
- Ley 14 de 2015, que modifica en 2 artículos a la Ley 6 de 2006. Publicada en Gaceta Oficial No.27767 de 24 de abril de 2015.
- Ley 15 de 26 de enero de 1959, que regula el ejercicio de las profesiones de ingenieros y arquitectos. Publicada en Gaceta Oficial No. 13772 de 28 de febrero de 1959.
- Código Civil de Panamá (2018), secciones de Obligaciones y de Contratos. Edición de 2018.
- Código Penal de Panamá (2018). Edición de 2018.

ASPECTOS REGULATORIOS DEL MERCADO DE VALORES MEDIOS EXCEPCIONALES DE TERMINACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR



Elías Domínguez
Asesor Legal
Superintendencia del Mercado de Valores
edominguez@supervalores.gob.pa

Fecha de recepción: 25/06/2019

Fecha de revisión: 10/07/2019

Fecha de aceptación: 30/09/2019

RESUMEN

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá dentro de las atribuciones otorgadas por el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 tiene como objetivo la regulación, supervisión y fiscalización de las actividades del mercado de valores que se desarrollen en la República de Panamá. Entre las funciones señaladas, la Superintendencia está facultada para imponer sanciones a las personas reguladas que incumplan con el contenido de la ley a través del desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador. No obstante lo anterior, dicho procedimiento permite en ciertas situaciones llegar a medios excepcionales de terminación del proceso. Situación que procederemos a explicar a continuación.

Palabras clave: mercado de valores, medios excepcionales, procedimiento sancionador

REGULATORY ASPECTS OF THE SECURITIES MARKET EXCEPTIONAL MEANS OF TERMINATION OF A PENALTY PROCEDURE

ABSTRACT

The Superintendency of the Stock Market of Panama within the attributions granted by the Single Text of Decree Law 1 of 1999 has as its objective the regulation, supervision and control of the activities of the stock market that are developed in the Republic of Panama. Among the functions indicated, the Superintendency is empowered to impose sanctions on regulated persons who fail to comply with the content of the law through the development of a sanctioning administrative procedure. Notwithstanding the foregoing, said procedure allows in certain situations to reach

exceptional means of terminating the process. Situation that we will explain below.

Keywords: stock market, exceptional means, sanction procedure

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El Procedimiento Sancionador es un proceso de investigación de índole sancionatorio correspondiente al ámbito del Derecho Administrativo contemplado en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 que regula el Mercado de Valores el cual es aplicable a los sujetos regulados y terceras personas que puedan resultar responsables por infracciones al cuerpo normativo que lo desarrolla.

En el marco de una Investigación Administrativa, el Procedimiento Sancionador comúnmente suele culminar con una Resolución mediante la cual se determina o descarta la existencia de una infracción.

Estos procesos, dependiendo de su complejidad, pueden prolongarse por un período máximo de 4 años sin considerar los recursos que a disposición tenga el sujeto investigado de confirmarse la existencia de una infracción que le pudiera conllevar a una o varias de las siguientes sanciones:

1. Multas de tipo monetarias
2. Amonestaciones con publicación en gaceta oficial
3. Separación del cargo administrativo o directivo
4. Suspensión y cancelación de licencias
5. Suspensión o limitación del tipo o volumen de operaciones que se pueden realizar

Si bien es cierto todas las fases que conlleva el Procedimiento Sancionador son necesarias para la determinación o desestimación de una posible infracción, no se puede dejar de advertir que dichas fases conllevan un consumo significativo de recursos y tiempo tanto para el sujeto investigado así como también para la Administración Pública que busca esclarecer los hechos.

No obstante lo anterior, la Ley del Mercado de Valores contempla cuatro mecanismos que buscan, bajo ciertas condiciones, culminar de manera anticipada situaciones en donde pueda existir irregularidades a la ley. Estos mecanismos son:

- Conciliación
- Desistimiento de la denuncia
- Acuerdo de Terminación Anticipada
- Proceso Simplificado

Conciliación y Desistimiento de la Denuncia (Texto Único de Ley del Mercado de Valores art. 260 / Decreto Ejecutivo No. 126 de 16 de mayo de 2017 art. 33 al 37)

El Texto Único de la Ley del Mercado de Valores contempla en su artículo 260 la posibilidad que sujetos regulados del mercado de valores y sus clientes o inversionistas ventilen a través de la figura de la Conciliación y el Desistimiento de la denuncia, una controversia existente entre ellos.

La conciliación es un método de solución pacífica de conflictos, esta se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, a través de la cual las partes gestionan la intervención de un facilitador imparcial para someter a conciliación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación.

Cabe destacar que la figura de la conciliación se encuentra regulada mediante Decreto Ley 5 de 1999¹ el cual estableció el régimen general del arbitraje, la conciliación y la mediación. La misma es reconocida a nivel constitucional por medio de la institución del arbitraje comprendida en el artículo 202.

La diferencia entre “*Conciliación*” y el “*Desistimiento de la denuncia*” estriba en que la primera se ventila a través de un organismo autorizado, con personería jurídica y con la intervención de un facilitador imparcial calificado, mientras que la segunda se establece sin intervención de un facilitador, y en el cual las partes en base al principio de la autonomía de la voluntad deciden de manera bilateral llegar a un mutuo acuerdo por lo general plasmado en un documento privado presentado por las partes a través de memorial notarial firmado.

Ambos mecanismo llevan a una eventual terminación anticipada del proceso sólo que en el primero (conciliación) se hace de forma tripartita, con intermediación de un tercero. Mientras que en el segundo se conjuga la voluntad bilateral de las partes en consenso para la solución pacífica del conflicto.

Tanto la Conciliación como el Desistimiento de la denuncia pueden llevarse a cabo bajo los siguientes supuestos:

Conciliación

1. Cuando no se ha producido un daño material al mercado de valores.
2. Cuando corresponda a posibles incumplimientos del sujeto regulado en sus deberes para con los clientes o inversionista.

¹ La Ley 15 de 2006 Restituye, Modifica y Adiciona artículos sobre materia arbitral declarados inconstitucionales respecto al Decreto Ley 5 de 1999, sin embargo los aspectos relacionados a la conciliación quedan intactos y no son adicionados o modificados en la Ley 15 de 2006.

3. Una vez ordenado el procedimiento sancionador y antes de notificado de la resolución que concluye el procedimiento sancionador.

Desistimiento de la denuncia

1. Dependiendo de la gravedad de la conducta del sujeto investigado
2. Cuando no se haya causado un daño material al mercado de valores
3. Antes de notificado de la resolución que concluye el procedimiento sancionador

Cabe señalar que el daño material causado al mercado de valores, es un criterio de importancia a ponderar ya que el interés general de la colectividad debe prevalecer sobre el de unos cuantos o en su defecto sobre el particular. Por tal razón somos de la opinión que ambos mecanismos sólo deberían ser considerados cuando traten sobre hechos de menor envergadura que repercutan en afectaciones individualizadas de clientes o inversionistas y en cuanto a la gravedad, sólo aquellas que no excedan las contempladas en los artículos 270 y 271 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores las cuales hacen alusión a infracciones graves (equiparables a la gravedad media) y leves, excluyendo de este modo las contenidas en el artículo 269 por considerarse muy graves.

Una vez reunidas las condiciones antes expuestas, la Superintendencia podrá, en ejercicio de la facultad sancionatoria, abstenerse de abrir un procedimiento de investigación o en caso de ya encontrarse uno en curso, ordenar su archivo.

Entre las causas comunes de controversias existentes entre los sujetos regulados y clientes o inversionistas podemos mencionar las siguientes:

- Recomendación adecuada: Las recomendaciones de comprar, vender o mantener una inversión hechas a un cliente teniendo motivos razonables para creer que se ajusta al perfil de inversión indicado por el cliente.
- Transacciones excesivas: Aquellas cuyo volumen de transacción generen gastos de comisiones significativas en proporción a los beneficios o utilidades obtenidas de aquella compra o venta.
- Información a clientes: El deber del regulado de remitir de forma periódica información clara y concreta de la cuenta de inversión o de los valores y efectivo depositados por el inversionista o cliente.
- Plazos de transmisión y ejecución: La pronta gestión de la entidad encargada sobre las órdenes impartidas por los clientes.
- Valoración y disposición de fondos y valores: Para facilitar la pronta disponibilidad de los fondos o valores a los clientes.

- Tarifas: El deber de publicar y aplicar debidamente las tarifas.
- Y en general todas aquellas que resulten del Acuerdo 5 del 2003 por el cual se reglamenta las normas de conducta, registro de operaciones e información de tarifas.

Acuerdo de Terminación Anticipada o ATA (Texto Único de la Ley del Mercado de Valores art. 261 / Decreto Ejecutivo No. 126 de 16 de mayo de 2017 art. 38 a 47)

El Acuerdo de Terminación Anticipada es un mecanismo jurídico que permite la terminación del Proceso Sancionador por una vía distinta a la resolución sancionatoria emitida al finalizar el proceso.

Una opción bastante utilizada por los sujetos regulados, los cuales al inicio del proceso son notificados que están siendo objeto de una Investigación Administrativa por posibles irregularidades a la Ley del Mercado de Valores. En esta figura, extraída del procedimiento sancionador Colombiano, el sujeto regulado solicita al regulador (la Superintendencia del Mercado de Valores) que se inicie un proceso de negociación para determinar el tipo y el monto de la sanción que se va a imponer.

Cabe destacar que la determinación de acceder o no a dicha solicitud es potestativa del Superintendente y además, que existe una ventana de tiempo en la cual esta figura puede ser solicitada, y esta es desde el momento en que se es notificado de la resolución que inicia el procedimiento sancionador hasta antes la notificación de la vista de cargo. Período este que comprende el período de fase de instrucción mediante la cual la Superintendencia dirige sus esfuerzos a determinar y recabar a través de los medios probatorios permitidos, la existencia o inexistencia de una conducta que infrinja el ordenamiento jurídico comprendido en la Ley del Mercado de Valores.

Siendo solicitado de manera oportuna y admitido, el Acuerdo de Terminación Anticipada se inicia en un cuadernillo aparte del expediente del procedimiento sancionador, lo cual suspenderá durante el término que dure dicha negociación, el desarrollo del proceso de investigación. No obstante lo anterior, la negociación no interrumpirá la prescripción de la acción sancionatoria.

En cuanto a la metodología de la negociación, se llevarán a cabo reuniones entre el investigado y el funcionario delegado para representar a la Superintendencia. El investigado puede asistir sólo o en compañía de su apoderado. El propósito de estas reuniones, las cuales comparten ciertos elementos parecidos a las figuras anglosajonas del Discovery² y del Settlement utilizado por nuestro

² Discovery: Práctica pre-judicial civil Estadounidense y de otros países Anglosajones como Inglaterra (Disclosure) por medio del cual las partes solicitan obtener las evidencias de su contra-parte. En la mayoría de los casos civiles se llega a un acuerdo (Settlement) después que ambas partes llegan a reconocer sus respectivas fortalezas y debilidades en el caso, lo cual reduce los costos y riesgos de un juicio.

homologo Estado Unidense “*el Securities and Exchange Commision (SEC)*”, es determinar:

- Que hechos inician la investigación.
- Establecer cuáles ocurrieron efectivamente y cuáles no.
- Con que material probatorio se cuenta al respecto.
- Las infracciones que infringen los hechos cometidos.
- La gravedad que reviste la conducta investigada.
- La sanción que correspondería a la situación particular.

Una de las ventajas de esta figura, es que, además de reducir significativamente el consumo de recursos en tiempo y dinero, la colaboración del investigado para la terminación anticipada del proceso se tomará en cuenta como un atenuante de la sanción que podría corresponderle, la cual se medirá en torno a criterios tales como:

- La gravedad de la infracción.
- La amenaza o el daño causado.
- Los indicios de intencionalidad.
- La capacidad de pago.
- Efecto de la sanción en la reparación del daño a los inversionistas afectados.
- La duración de la conducta.
- La reincidencia del infractor.

Sin embargo, independiente de la atenuante a aplicar, el extracto medular de la sanción impuesta correspondiente al número de resolución, fecha, persona sancionada y monto de la sanción será de conocimiento público a través de la publicación en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Es de anotar que la solicitud de negociación por parte del regulado no será tomada en cuenta como una confesión de parte y de no llegarse a un acuerdo, el proceso sancionador seguirá su curso normal.

Proceso Simplificado (Ley del Mercado de Valores art. 267)

El Proceso Simplificado es un mecanismo que le permite al infractor reconocer explícitamente su responsabilidad de tal manera que se pueda resolver sin mayor trámite la imposición de la sanción que proceda, previa consideración de los criterios de valoración previstos en la Ley.

El Procedimiento Sancionador Español³ señala que este mecanismo jurídico aplica bajo supuestos en el que se considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.

Sin embargo a nuestro concepto el criterio de valoración para optar por este proceso por parte del infractor puede obedecer a tres circunstancias estratégicas a considerar tales como:

- Cuando considere que las consecuencias de sus actos no sean de tal gravedad y magnitud como para dedicar tiempo y recursos en defensa de una causa evidentemente probada e improbable de desestimar.
- Por haber precluido el término para optar por la solicitud de un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) por haber sido notificado de la Vista de Cargos.
- Por considerar que, en el caso de optar por un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA), el daño reputacional⁴ que exige dicha opción, al tener que poner en conocimiento la sanción mediante publicación en página web de la Superintendencia, pudiera ser mayor que el daño material proveniente de la sanción económica si se trata de una infracción menor la cual no requiere ser publicada en Gaceta Oficial conforme lo establece el artículo 274 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.

Cabe destacar que el infractor, al momento de su declaración, podrá hacerse acompañar de su apoderado legal, sin embargo, deberá rendir su declaración personalmente sin la intervención ni interrupción del mismo durante la diligencia. Aunado a lo anterior también deberá señalar en su declaración, las medidas específicas que va a ejecutar para subsanar el daño causado como resultado de su actuación.

A pesar de que la norma nada indica al respecto, la colaboración del infractor en la terminación anticipada del proceso puede ser tomada en consideración al momento de la determinación sobre la imposición de la sanción que corresponda.

3 Artículo No.23, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016)

4 Los dos artículos de la Ley del Mercado de Valores que hacen alusión a publicaciones obligatorias de las sanciones son el 261 (Acuerdo de Terminación Anticipada – publicadas mediante página web de la Superintendencia) y 272-273 (Sanciones Administrativas a infracciones muy graves – publicada de manera íntegra en Gaceta Oficial)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Texto Único Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 “Ley del Mercado de Valores”.
- Decreto Ejecutivo No. 126 de 16 de mayo de 2017 “Procedimiento Sancionador”.
- Ley 15 de 2006 Restituye, Modifica y Adiciona artículos sobre materia arbitral declarados inconstitucionales respecto al Decreto Ley 5 de 1999.
- Artículo No.23, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
- Soto Delgado, P. (2016). Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental. Santiago: Revista Ius et Praxis, año 22, No 2
- Rebollo Puig, M. et al. (2005). Panorama del derecho administrativo sancionador en España. España: Red Revista Estudios Socio-Jurídicos Número 001, Vol (7). Documento recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioumecitsp/detail.action?docID=3180864>
- Retortillo Baquer, L. (1976). Multas administrativas. Revista de Administración Pública, núm 079, CEPC – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Documento recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioumecitsp/detail.action?docID=3223604>
- Tardío Pato, J. (2014). Lecciones de derecho administrativo: acto administrativo, procedimiento y recursos administrativos y contencioso-administrativos. España: Editorial Club Universitario. Documento recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/umecit/113661>
- Jiménez Jiménez, D. (2015). La culpa en el derecho sancionador: estudio aplicado al derecho financiero colombiano. Colombia: Editorial Temis, Universidad de los Andes. Documento recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/umecit/68828>

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA



Magister Iván Estribí del Pino

Fiscal Tercero de Asuntos de la Familia y el Menor
Ministerio Público
iestribi05@gmail.com

Fecha de recepción: 25/07/2019

Fecha de revisión: 11/08/2019

Fecha de aceptación: 01/10/2019

RESUMEN

La violencia es un hecho en el que se utiliza la fuerza y se manifiesta el poder. La violencia doméstica, también denominada “intrafamiliar” por su parte, es una práctica o ejercicio tanto de fuerza como de poder que se produce entre miembros de una misma familia, en la que una persona es la que ejerce la fuerza o agrede, y otra u otras personas son las que resultan agredidas. Como estos hechos se dan dentro de la familia, por eso se dice que es violencia intrafamiliar o doméstica. En la República de Panamá, la familia está tutelada por el Estado, a través de toda una jurisdicción especial, que desarrolla normas sustantivas y adjetivas, e incluso constitucionales, que buscan brindar mayor protección, a la principal célula de la sociedad.

Palabras Claves: Familia, violencia doméstica, menor de edad, cónyuges, medidas cautelares.

OF PROTECTION MEASURES AND PRECAUTIONARY MEASURES IN CRIMINAL INVESTIGATION IN THE CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE

ABSTRACT

Violence is a fact in which force is used and power manifests. Domestic violence, is a practice or exercise of both force and power that occurs between members of the same family, in which a person is the one who exerts force or aggregates, and another or other people are the ones who are attacked. As these facts occur within the family, that is why it is said to be domestic or domestic violence.

In the Republic of Panama, the family is protected by the State, through a whole special

jurisdiction, which develops several rules and even constitutional norms that seek to provide greater protection to the main cell of society.

Key Words: Family, domestic violence, minor, spouses, precautionary measures.

INTRODUCCIÓN

La Ley 14 de 2007, por la cual se aprobó el Código Penal, introdujo modificaciones importantes a los delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, contemplados en el Libro Segundo, Título V, del Código Penal. Hasta la entrada en vigencia del Código Penal de 2007, la materia estuvo regulada por las disposiciones del Código Penal de 1982, y las modificaciones introducidas por las Leyes 27 de 1995 y 38 de 2001. Fue dividida en cinco capítulos, en su orden, a saber: Delitos Contra la Familia, Contra el Estado Civil, Sustracción de Menores, Incumplimiento de Deberes Familiares y de la Violencia Doméstica y el Maltrato al Niño, Niña y Adolescente.

El nuevo ordenamiento penal estructura las figuras delictivas, ubicándolas en cuatro capítulos, del artículo 200 al 212, manteniendo los tipos penales identificados como Violencia Doméstica y Maltrato de Niño, Niña o Adolescente, pero trasladados a los dos primeros capítulos; introduciendo nuevos tipos penales, por lo menos en la denominación de algunos de ellos, identificándolos como Delitos Contra la Identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad, en el Capítulo III; y manteniendo los Delitos Contra la Familia, pero trasladados al Capítulo IV.

Fueron eliminados como capítulos la Sustracción de Menores y el Incumplimiento de Deberes Familiares.

MARCO LEGAL

El tema de la violencia doméstica y la necesidad de hacerle frente a ese problema ha sido impulsado en el ámbito nacional e internacional por los movimientos de mujeres que luchan por la igualdad de oportunidades para las mismas, tanto en el ámbito privado como en el público.

Una mirada a los titulares de nuestros periódicos, donde se plasma la violencia que se vive en Panamá, y los resultados que en muchos casos son irreparables al cobrar vidas, en su mayoría de mujeres, no dejan dudas de que Panamá no escapa al flagelo de la violencia doméstica, y permiten recapacitar sobre la necesidad de una legislación acorde con la realidad de nuestra sociedad, que responda a la urgencia de enfrentar la violencia como un problema “*multidimensional y multifacético*”.

Tomando en cuenta precisamente esas características que revisten ese fenómeno, es que se ha señalado que “...la violencia como productora de enfermedad, amenaza la integridad personal

y el funcionamiento orgánico, emocional y social, trayendo como consecuencia discapacidad, minusvalía física, mental, social y laboral, a la vez que afecta la calidad de vida de las personas directa e indirectamente involucradas”.

Partiendo de las repercusiones que la violencia doméstica tiene en el aspecto social, cultural, político y económico, que influyen de manera negativa en el desarrollo humano sostenible, es que se plantea la necesidad de trabajar por el bienestar y calidad de vida de las y los panameños, lo que indudablemente requiere de un abordaje legal, precedido de una visión clara del problema, que permita afrontar la violencia doméstica.

Desde el punto de vista legal, podemos decir que Panamá cuenta con una serie de leyes que promueven el reconocimiento de los derechos humanos y que tienden a hacerle frente a la violencia doméstica.

ANTECEDENTES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL:

La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, aprobó una declaración política y una serie de acciones a tomar, producto de acuerdos alcanzados entre los gobiernos para mejorar la condición de las mujeres en el mundo.

Al hilo de lo expuesto, puntualmente la Plataforma de Acción de Beijing, acordó introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia en el hogar, el lugar de trabajo o la sociedad.

En el tema de la lucha contra la violencia doméstica, se destaca la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, aprobada por Naciones Unidas y ratificada por Panamá, mediante Ley 4 del 22 de marzo de 1980; así como su protocolo facultativo más recientemente adoptado por Panamá, y que es la Ley 17 de 28 de marzo de 2001, como mecanismo jurídico adjunto a la Convención, que: *“Establece un procedimiento relacionado con el derecho de petición, que podrá ser presentado por personas o grupos de personas de un Estado parte, que aleguen ser víctimas de una violación por dicho Estado de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención”.*

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como *“Convención de Belem Do Pará”*, aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1994 y ratificada por Panamá mediante Ley 12 de 20 de abril de

1995, es otra convención internacional que se constituye desde el punto de vista jurídico, en uno de los principales instrumentos que tienen como finalidad eliminar la violencia doméstica y la discriminación.

En materia de derechos de la niñez, se cuenta con la Convención de los Derechos del Niño (Ley 15 de 6 de noviembre de 1990), que sirve de fundamento legal para la promoción del derecho a la protección integral de la niñez y por tanto, a la lucha contra el maltrato. En la Unión Europea hay que destacar, en primer lugar, que la Decisión Marco de 2001 sobre el Estatuto de la Víctima en el Procedimiento Penal impone un especial trato y respeto a su dignidad para las víctimas especialmente vulnerables, entre las que se encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Muy importante resulta también la ejecución de los programas llamados Daphne que fueron diseñados específicamente para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre las niñas y los niños, los adolescentes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo como parte del programa general *“Derechos fundamentales y justicia”*.

Su objetivo es proteger a los niños y niñas, a la juventud y a las mujeres de todas las formas de violencia tanto en la esfera pública como privada y lograr un elevado nivel de protección de la salud, bienestar y cohesión social. La explotación sexual y la trata de personas están incluidas.

Comprende medidas preventivas y apoyo y protección a las víctimas y grupos de riesgo. Esta medida se ejecuta mediante: acciones transnacionales de ayuda y promoción dirigidas a ONGs (organizaciones no gubernamentales) y otras organizaciones; campañas de sensibilización; difusión de los resultados; acciones que generen actitudes positivas; redes multidisciplinarias; recopilación de información; concepción de material educativo y de sensibilización; estudios; programas de apoyo a las víctimas y a los agresores; proyectos transnacionales específicos de interés comunitario; y otras acciones complementarias específicas que puede decidir la Comisión Europea (que viene a ser como el Gobierno de la Unión con un comisario por país).

El programa Daphne I se aprobó para los años 2000-2004 con un presupuesto de 20 millones de euros, el Daphne II para 2004-2008 con un presupuesto de 50 millones de euros y el Daphne III se ha aprobado para el periodo 2007 a 2013 elevando el presupuesto a 116,85 millones de euros. Además, algunos países miembros, entre ellos España, cuentan con leyes específicas sobre la violencia doméstica y/o sobre la violencia de género.

Las medidas de Protección deben garantizar en lo posible la seguridad de la víctima frente a

nuevas agresiones de carácter Físico verbal o psicológico, para lo cual la ley 38 desde el 2001 en neutro país ha contemplado los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de las personas agredidas dentro del seno familiar.

En este sentido nuestro país ha suscrito convenios internacionales que conforman parte del “*Bloque Constitucional*”, los cuales velan y protegen los derechos humanos de las mujeres y propugnan por erradicar la violencia en contra de éstas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Las medidas de protección se encuentran reguladas en la Ley 38 de 2001, en la que se enuncian 14 medidas que pueden ser adoptadas por la autoridad competente. No obstante, mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, se adopta el nuevo Código Procesal Penal, con el cual se introducen nuevas medidas, entre ellas:

1. El desalojo del agresor, por un periodo mínimo de un mes.
2. La utilización del brazalete electrónico con receptor en la víctima, para evitar que el agresor se le acerque a menos de 200 metros. De incumplirse la medida, se ordenará la detención provisional al agresor hasta por 30 días. En este caso se le informará a la víctima del riesgo que implica para su vida el acercarse a su agresor a menos de 200 metros.
3. La suspensión de portar armas al presunto agresor mientras dure el proceso, en caso de que éste realice actividades que impliquen la utilización de armas de fuego.
4. Además de lo anterior, ordenar la reubicación laboral del presunto agresor.
5. Ordenar al empleador de la víctima su reubicación labora, por solicitud de ésta.
6. Ordenar la ubicación de la víctima a un centro educativo distinto, por solicitud de la misma.
7. Se permite la entrada a la residencia, habitación o morada si hay agresión actual o pedida de auxilio.
8. Comunicar al Registro Público o a la autoridad correspondiente para que impida la disposición, por cualquier título, del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.
9. Suspender los derechos inherentes a la reglamentación de visitas del presunto agresor, mientras dure el proceso.
10. Fijar pensión alimenticia provisional.
11. Ordenar al presunto agresor asistir a terapias sicológicas o siquiátricas, mientras dure el proceso.
12. Disponer que la víctima reciba tratamiento individual sicológico o siquiátrica especializado, por el tiempo necesario.

13. Ordenar la aprehensión del presunto agresor por cuarenta y ocho horas.

14. Cualesquiera otras que permitan las leyes.

Aunado a lo anterior, son un mandato expedido por las autoridades competentes a través de las cuales se establecen pautas para que un agresor o agresora se abstenga de incurrir o realizar determinados actos o conductas constitutivos de Violencia.

Es responsabilidad del Ministerio Público defender los intereses de la víctima de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 69 de la ley 63 de 28 de agosto 2008.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 38 DE 10 DE JULIO DE 2001

El artículo 4 de la Ley 38 de 2001 consagra, por primera vez en nuestra legislación penal, las medidas de protección que, de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la ley, podrán aplicarse de oficio o a solicitud de parte interesada, verbalmente o por escrito, una vez que la autoridad tenga conocimiento del hecho de violencia o en cualquier momento que lo considere necesario.

Ésta constituye una innovación necesaria dentro de nuestra legislación, dirigida a proteger, con efectividad, a la víctima y, en la práctica se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo el desalojo del presunto agresor o agresora (numeral 2) de la casa habitación que comparte con la víctima superviviente, independientemente de quién sea el propietario de la vivienda.

También se aplica con frecuencia, y conjuntamente con la anterior, la prohibición del agresor de acercarse al domicilio común o aquél donde se encuentre la víctima sobreviviente (numeral 6), así como el otorgamiento en uso exclusivo, a la persona agredida, de los bienes muebles necesarios para el funcionamiento adecuado del núcleo familiar (numeral 12), levantar el inventario de los bienes muebles del núcleo habitacional para asegurar el patrimonio común, y la comunicación inmediata a la autoridad competente para que fije, provisionalmente, la pensión alimenticia, en los casos que se amerite (numeral 13). Se ordena, asimismo, a la autoridad administrativa que le otorgue boleta de protección a la víctima.

Las medidas de protección incluyen, también, el arresto provisional del agresor/a, por un término que no sobrepase las veinticuatro horas (numeral 1); el allanamiento con la finalidad de socorrer, inmediatamente, a la presunta víctima sobreviviente del hecho de violencia (numeral 3); autorización de la víctima a radicarse, provisionalmente, en el domicilio diferente del común, para protegerla de agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio (numeral 4); reintegrar al domicilio común a la persona agredida que haya tenido que salir de él, si así lo solicita

(numeral 7); y, en consecuencia, deberá aplicarse de inmediato la medida de arresto por 24 horas y prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el domicilio común, así como incautarlas a fin de garantizar que no se utilicen para intimidar, amenazar ni causar daño (numeral 5).

Los numerales 8, 9 y 10 se refieren a las medidas de protección que se han de adoptar cuando las víctimas sean menores de edad (suspensión de la guarda y crianza, reglamentación de visitas e impedimento de salida del país de los hijos e hijas menores de edad de las partes).

Las medidas de suspensión de guarda y crianza, así como de reglamentación de visitas, tienen que ser solicitadas ante las autoridades competentes, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 38 de 2001 que, de acuerdo a nuestra legislación, corresponden a los Juzgados Seccionales de Familia y los de Niñez y Adolescencia.

El numeral 14 del artículo 4 de la Ley 38 de 2001 consagra que, en caso de que existan graves indicios de responsabilidad en su contra, el agresor o agresora deberá cubrir el costo de la reparación de los bienes o de la atención médica. El último párrafo del artículo 4 de la Ley 38 de 2001 establece una protección especial en caso de que la violencia sea reiterada, a cargo de las autoridades de la Policía Nacional.

Esta protección especial ha sido aplicada en ciertos casos, pero, en la práctica, se ha limitado a la ronda policial a la vivienda de la víctima o lugar donde ella lo ha solicitado, así como su petición de ser escoltada, dentro de un determinado horario, a la parada del transporte público. No obstante, lo anterior, la misma no garantizará que se cometan nuevas agresiones cuando la ronda haya finalizado. Lo anterior constituye un problema generalizado, ya que no cuentan los Estados con efectivos policiales suficientes para vigilar, de manera permanente, a las víctimas. La alternativa que se está reconociendo para casos de acreditado riesgo, en España, consiste en el control de las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación, por medio de aquellos medios electrónicos que lo permitan, lo cual será acordado por el juez de instrucción o el de ejecución.

La Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 “*Medidas de Protección Integral para la Violencia de Género*” (España), consagra en su artículo 64 lo siguiente: “Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su cumplimiento. El juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.”

DESACATO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las medidas de protección se adoptan a través de una resolución motivada, que es notificada a las partes. De incumplir el agresor con las mismas, incurre en desacato, tal como lo establece el último párrafo del artículo 6 de la Ley 38 de 2001, por lo que se aplica el numeral 9 del artículo 1932 del Código Judicial, en concordancia con lo que establece el artículo 1933 de la precitada excerta legal.

El artículo 1932 dice: “Artículo 1932: En materia civil son culpables de desacato: 9. En general, los que durante el curso de un proceso o de cualquier actuación judicial o después de terminados, ejecuten hechos que contravengan directamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada; y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de ejecutar algún hecho, rehúsen sin causa legal obedecer al juez.”

Lo medular del artículo 1933 del Código Judicial establece: “Artículo 1933: A la persona responsable de desacato, el juez le impondrá arresto por todo el tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial que motiva su rebeldía. Para la imposición de la pena corporal, cuya duración en ningún caso podrá ser mayor de seis meses por una misma falta, se procederá así: La persona contra la cual se dicte el apremio corporal será detenida por un término no mayor de un mes. Vencido ese período será puesta en libertad y si pasaren diez días de estar libre sin que presente la prueba de haber incumplido lo ordenado por el juez, será detenida nuevamente hasta por ocho meses y así sucesivamente hasta que se cumpla el año que puede durar el apremio en su totalidad...”

AUTORIDADES QUE PUEDEN APLICAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CON LA NUEVA LEGISLACIÓN

De conformidad con lo que establecen los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 38 de 2001, las medidas de protección pueden ser aplicadas por las autoridades de policías (corregidores/as y jueces/jueces nocturnas/as), las autoridades tradicionales de las zonas indígenas, los/las agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia.

Las autoridades administrativas deberán poner el caso en conocimiento del funcionario de instrucción, en un término no mayor de 72 horas.

La norma es clara al señalar que: *“Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos”*. En términos

generales, las medidas de protección, por su carácter inmediato, permiten a la víctima garantizar sus derechos de manera efectiva.

No obstante, lo anterior, esto requiere una coordinación y cooperación permanente de las autoridades de policías (corregidores/as y jueces/juezas nocturnas/as), quienes son las que ejecutan dichas medidas en la mayoría de los casos. Esto nos plantea la necesidad de que los funcionarios de instrucción y los jueces tengan a su disposición personal capacitado para que ejecute sus órdenes de protección.

Una vez entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, los funcionarios competentes para aplicar las medidas de protección serán los funcionarios de instrucción y del órgano jurisdiccional.

Las autoridades de policía no podrán aplicarlas motu proprio. En este aspecto es importante tener presente que, aunque la ley 63 de agosto de 2008, no alude a los corregidores, estos con sustento a la ley 38 de 2001, pueden aplicar las Medidas de Protección. Igualmente con la ley 82 del 24 de octubre de 2013 que adopta medidas de Protección contra las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los Hechos en contra de la mujer establece en su Capítulo 8º en el quebrantamiento de Medidas de Protección y de sanciones en su artículo 49 se adiciona el artículo 397-A al Código Penal así “ quien incumpla medidas de II Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia PONENCIAS NACIONALES 16 al 19 de agosto de 2016 Protección a favor de una mujer dentro de un proceso penal será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, igualmente en las disposiciones Procesales Capítulo 8º en su artículo 52 *“establece que con la sola denuncia de un solo hecho o de varias que puedan constituir delito la autoridad competente podrá dictar las medidas de protección”*.

DURACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las medidas de protección tienen un límite máximo de seis (6) meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas durante el tiempo que dure el proceso, de acuerdo con la evaluación que realice la autoridad que conozca del caso. Sin embargo, persiste el vacío legal acerca de qué ocurre con las mismas luego que el proceso ha culminado, ya que dejan de tener efectividad y se corre el riesgo de que la ofendida, desprovista de una medida de protección vigente, pueda ser víctima nuevamente del agresor, por lo que se requiere una modificación legislativa en este sentido.

CONCLUSIÓN

Las medidas de protección son actitudes que toma en cuenta el Estado a fin de proteger a las víctimas de violencia familiar, y destinadas a hacer que la violencia familiar cese o desaparezca.

Dentro de las medidas de protección que establece nuestra legislación están el retiro del agresor del domicilio de la víctima, el impedimento de acoso a la víctima, la suspensión temporal de visitas y el inventario sobre los bienes, medidas que buscan brindar protección a la víctima frente a su agresor, así como de sus bienes.

La falta de medidas drásticas de castigo para el que incumple las medidas de protección, impide que éstas cumplan sus objetivos, que fundamentalmente es el cese de la violencia. El éxito en el cumplimiento de las medidas de protección depende en muchos casos de las actitudes que adoptan las autoridades y de la importancia que le brinden a fin de hacerlas efectivas.

PROPUESTA

Las autoridades debemos tomar las debidas precauciones y dictar mandatos tendientes a hacer cumplir sus resoluciones, empleando y solicitando a tal efecto del apoyo de la policía principalmente, lo que se requiere, con la finalidad de que la sociedad vuelva a tener credibilidad en nuestras autoridades y denuncien con confianza a aquellos que violen la Ley.

El padre y la madre que conserve en el sentido de lo que es niño o niña, intenta ver el mundo a través de sus ojos está contribuyendo de forma más positiva a su desarrollo. Una experiencia clave la constituye en familia y colaborar en dicha actividad constituye una experiencia única lo cual aportara una valoración a la calidad y al alimento que va más allá de su valoración nutricional.

También recomendamos a invitar a los jóvenes “Conectarse con los valores éticos y morales, indicándoles que la patria los necesita” Finalmente se debe crear conciencia social y educar a la sociedad y a las futuras generaciones haciéndoles saber la importancia de la dignidad humana, la importancia de los valores, y que las normas son de obligatorio cumplimiento. Y saber que la única forma de salir de la violencia es a través de la educación.

El maltrato psicológico es el que destroza completamente a las personas. O el acoso, el sentirse vigilado, el sentirse no querido. Es también muy doloroso un silencio, una mirada fría, una mirada despectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Constitución Política de la República de Panamá. (2004) Texto Único.
- Código de la Familia. (2015). Ley 3 de 17 de mayo de 1994. Editorial Mizrachi & Pujol.S.A. Panamá.
- Código Judicial de la República de Panamá: Libro I al IV Apéndice e Índice, con leyes que lo reforman, adicionan y complementan. (1990). (s.l.): Editorial Jurídica del Istmo.
- Código Procesal Penal de la República de Panamá. Ley 63 (28 de agosto de 2008). (sistema acusatorio). Colombia: D’Vinni, S.A.
- Fuentes, A. (2013). Política Criminal y Derecho procesal penal: Análisis a la luz del Sistema Penal Acusatorio. Panamá: Cultural Portobelo
- Tenorio Godínez, Lázaro y Tagle De Ferreyra, Graciela. Prólogo de Ignacio Goicoechea. (2011), “La Restitución Internacional de la Niñez” Enfoque Iberoamericano Doctrinario y Jurisprudencial”. Primera ed., Editorial Porrúa S.A. de C.V.
- Valenzuela Reyes, María Delgadina. (2015) “Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes ¿Utopía o realidad?”, Segunda ed., Editorial Porrúa S.A. de C.V.

LA PRUEBA PERICIAL COMO ELEMENTO PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



Guillermo Barría Vargas
Abogado Litigante
guillermobarria@hotmail.com

Fecha de recepción: 15/02/2019

Fecha de revisión: 13/03/2019

Fecha de aceptación: 21/03/2019

RESUMEN

El medio de prueba pericial, antes era poco conocido o difundido; sin embargo, con los avances tecnológicos y las nuevas tendencias o campos en las cuales se desarrollan las relaciones personales, comerciales y jurídicas, han llevado a fortalecer su uso y se ha incorporado como el resto de la evidencia, siendo un medio de prueba más contundente, preciso y eficaz, logrando instruir en buena medida a los jueces de elementos que estos desconocen, aunque el tribunal tiene la facultad de apartarse del criterio expuesto en el dictamen pericial, siempre y cuando pueda fundamentar correctamente el punto de vista propio.

En la actualidad, el perito dentro del Sistema Penal Acusatorio, es un medio de prueba imprescindible para la adecuada fundamentación de las alegaciones de los litigantes y la correcta resolución por parte del Juez.

Palabras Claves: Tribunal, Juez, prueba, perito, Sistema Penal Acusatorio

EXPERT EVIDENCE AS EVIDENCE IN THE ACCUSATORY CRIMINAL PROCESS OF THE REPUBLIC OF PANAMA

ABSTRACT

The means of expert evidence was previously little known or publicly spread, however, with the technological advances and new trends and fields in which personal, commercial and legal

relationships develop, have led to the strengthening of its usage and it has been incorporated as the rest of the evidence as a more conclusive, precise and effective means of proof and thus it can bring light on the elements that the judges may not know or it may help to obtain an appreciation closer to the object of the opinion, although the court has the faculty to depart from the criterion stated in the expert opinion, as long as a point of view can be correctly substantiated.

In present times, the legal expert within the Accusatory Criminal System is an essential means of proof for the adequate substantiation of the arguments of the litigants and the correct resolution by the Judge.

Key Words: court, judge, test, expert, accusatory criminal system.

Introducción

El paso del tiempo ha generado que día a día las ciencias avancen sobre todos los ámbitos de la vida y nuestra República de Panamá, no escapa de dicha realidad. El Derecho no ha permanecido ajeno a este fenómeno. Las relaciones sociales cada vez se complejizan y tecnifican, lo que ha llevado a que los jueces se encuentren en la situación de fallar sobre cuestiones para las cuales deberán contar para una correcta resolución con conocimientos que probablemente no posean y que no tienen por qué poseer dado que nuestro marco normativo ha optado por tener jueces expertos en las normas jurídicas y no en otras áreas. Ante esta circunstancia, se hace imperativo recurrir a un tercero, capaz de dar respuestas a este escollo, a quien se le ha denominado “*perito*”.

Hoy en día, una apreciación consciente y razonable de los hechos por parte del juzgador es casi imposible sin la aplicación de algún conocimiento técnico o científico. Y la forma más común de acercar este conocimiento al órgano jurisdiccional es a través de la prueba pericial.

Siendo su conocimiento limitado en ciertos ámbitos, el juez requiere cada vez con mayor frecuencia el aporte que en determinadas materias pueda ofrecerle un experto en el tema, sobre algún conocimiento científico o técnico que sirvan para establecer ciertos hechos controvertidos.

La Prueba Pericial en el Proceso Penal Acusatorio

En el proceso penal acusatorio, la prueba pericial está regulada en el Código Procesal Penal y dentro de los aspectos jurídicos de mayor preponderancia consideramos prudente exponer los siguientes:

Presentación, Admisión y Objeto de la Prueba.

El proceso penal acusatorio, al ser un proceso netamente oral y que se desarrolla en tres fases – investigación, intermedia y juicio oral – es en la audiencia de acusación, previo al juicio oral, que las partes pueden anunciar u ofrecer las pruebas, en nuestro caso objeto de investigación, es la prueba pericial, misma que será practicada de ser admitida por el juez de garantías en el juicio oral, veamos el sustento jurídico establecido en el Código Procesal Penal.

“Artículo 340. La acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio público al imputado, presentará al Juez de Garantías la acusación requiriendo la apertura a juicio.

La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de la imputación, aunque efectuara una distinta calificación jurídica, y deberá contener:...

5. El anuncio de la prueba, presentando la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, la ocupación y el domicilio, salvo en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332, en los cuales se deberán acompañar esos datos de individualización de testigos y peritos en sobre sellado; no obstante, la identidad podrá ser del conocimiento de la defensa.

Artículo 349. Apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, si no se hubiera suspendido, o bien en la nueva fecha que fijará el Juez de Garantías dentro de cinco días de recibidos los antecedentes del Tribunal de Juicio, dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar: ...

Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 346.

La individualización de los testigos, peritos e intérpretes que deberán ser citados a la audiencia del juicio oral, con sus respectivas direcciones o domicilios, salvo que hubiera hecho reserva de ellos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332.” (Resaltado es nuestro)

De lo expuesto en los artículos que preceden, podemos deducir que es en la acusación realizada por el Ministerio Público, del querellante autónomo o en la oposición de la defensa, el momento preciso en que las partes deben anunciar la prueba pericial. El juez de garantías en el auto de apertura del juicio oral, de admitir la prueba pericial, deberá en dicho acto individualizar cada una de las experticias que se realizaran ante el Tribunal de Juicio Oral.

Práctica de la Pruebas

Una vez que el proceso judicial penal, entre en la fase de juicio oral que se deberán practicar todas pruebas anunciadas u ofrecidas por las partes, veamos el sustento jurídico establecido en el Código Procesal Penal.

“Artículo 366. Inicio. Constituido el Tribunal, quien presida verificará la presencia de las partes, los testigos, los peritos o los intérpretes y declarará abierto el juicio, advirtiéndole al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder e indicándole que esté atento a lo que va a oír.

Artículo 367. Presentación inicial. Inmediatamente, el Presidente del Tribunal ordenará al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y finalmente al defensor y a los intervinientes si los hubiera.

Artículo 369. Práctica de pruebas. Después de las presentaciones iniciales de las partes se recibirá la prueba ofrecida, comenzando con la del Fiscal, luego el querellante y al final la defensa. Dentro de su respectivo turno cada parte tendrá libertad para desahogarla o presentarla al Tribunal, según corresponda a su propia teoría del caso.” (Resaltado es nuestro)

Podemos analizar de estos artículos, que una vez constituido el Tribunal de Juicio, se debe verificar la presencia de los peritos, y una vez realizada la presentación inicial de cada una de las partes, se recibirán las pruebas periciales ofrecidas bajo la plena libertad de desahogo según considere cada uno de los intervinientes en el proceso y su teoría del caso.

Libertad Probatoria.

En materia de prueba, el Código Procesal Penal Panameño, regula el principio de libertad probatoria, dando así mayor amplitud a la actividad probatoria, puesto que permite que los hechos punibles, puedan ser acreditados por cualquier medio de prueba, siempre que cumplan las formalidades legales, y para ello se utilizarán, los procedimientos de incorporación al proceso más análogos con referencia a los medios de pruebas tradicionales, veamos que establece nuestra normativa al respecto:

“Capítulo II Medios de Prueba

Artículo 376. Libertad probatoria. Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo las limitaciones que la ley establezca.”

En atención al referido artículo expuesto, podemos deducir que la prueba pericial tiene total aceptación dentro del proceso penal, toda vez que, dicho elemento probatorio es perfectamente permitido procesalmente, y sus características serán desarrolladas más adelante.

Licitud y Pertinencia de la Prueba.

Como es sabido, en todo proceso judicial solo tendrán validez y pueden ser objeto de valoración jurisdiccional, las pruebas obtenidas de forma lícita y tal como expusieramos en líneas que anteceden, deben presentarse en el momento específico, establecido en nuestro ordenamiento procesal penal, caso contrario no podrán ser apreciadas por el juzgador, a continuación consideramos prudente exponer que nos indica el Código Procesal Penal al respecto.

“Artículo 377. Licitud de las pruebas. Los elementos de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 378. Oportunidad y relevancia de la prueba. Para que sean apreciadas en el proceso, las pruebas deberán aducirse, admitirse, diligenciarse e incorporarse dentro de los términos u oportunidades señalados en este Código, y deberán referirse, directa o indirectamente, al objeto del hecho investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad.

Artículo 379. Lectura de pruebas en el juicio. Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura o reproducción:

1. Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes exijan la práctica de estas pruebas oralmente cuando sea posible, si es que el testigo o perito se encuentra en el lugar del juicio y ha cesado el impedimento que permitió su anticipación.
2. Los informes periciales de ADN, alcoholemia y drogas, salvo que algún interviniente estime imprescindible la concurencia del perito al juicio y el Tribunal así lo ordene.
3. ...
4. La prueba documental, las certificaciones y las actas de reconocimiento, registro o inspección, realizadas conforme a lo previsto por este Código. La lectura de los elementos esenciales de las pruebas enunciadas no podrá omitirse ni aun con acuerdo de partes, salvo que a ella se hayan referido con suficiencia los testigos y peritos.
(Resaltado es nuestro)

El último articulado expuesto, nos permite indicar que, a pesar que el proceso penal es netamente oral, y debe desarrollarse bajo esa coherente dialéctica, en atención a la teoría del caso

de cada uno de los intervinientes, existe una excepción que permite darle lectura literal a algunos medios probatorios, entre estos elementos de la prueba pericial como son dictámenes de ADN, alcoholemia, drogas, las actas de inspecciones entre otras.

Valoración de la Prueba

Como es conocido, en el proceso penal acusatorio, al igual que en todos los entes jurisdiccionales de Panamá, el juzgador al momento de valorar las pruebas lo hará de acuerdo a la sana crítica, sin contradecir la lógica o los conocimientos científicos.

“Artículo 380. Apreciación de la prueba. Los jueces apreciarán cada uno de los elementos de prueba de acuerdo con la sana crítica. La apreciación no podrá contradecir las reglas de lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos. El Tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida.

Cuando el juicio se realice por Jurados, estos apreciarán la prueba de acuerdo con su íntima convicción. (Resaltado es nuestro)

Ahora bien, a pesar que la prueba pericial le brinda al juzgador un panorama esclarecedor de los hechos, este medio probatorio debe ser valorado en conjunto con todos los elementos probatorios allegados al dossier, a fin que la decisión este revestida de una motivación amplia y concentrada de todos los medios probatorios.

La Prueba Pericial

La prueba pericial, es un medio probatorio sumamente utilizado en el proceso penal acusatorio, y es uno de los principales medios, que permite generar en los administradores de justicia la convicción al momento de tomar su decisión jurisdiccional, veamos que nos expresa nuestro Código Procesal al respecto.

“Sección 2ª Peritajes

Artículo 406. Procedencia. Puede practicarse un peritaje cuando sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un elemento de prueba. La prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes.

Solo podrá fungir como perito la persona natural que acredite mediante el respectivo certificado o diploma su idoneidad para la materia sometida a su experticia o dictamen. Se exceptúan los casos prácticos para los cuales no se requiere diploma o certificado de idoneidad, en cuyo caso deberá acreditarse la experiencia. (Resaltado es nuestro)

En atención a lo expuesto, debemos indicar que el peritaje, es fundamental en un proceso judicial, toda vez, que permite esclarecer aspectos científicos, artísticos o técnicos que son del desconocimiento del administrador de justicia, pero dicho elemento de convicción en el juzgador solo se puede lograr, si la experticia se realiza de manera imparcial, objetiva e independiente, aplicando en ella toda la experiencia y conocimiento.

Práctica y Objeto de la Prueba Pericial en la Fase de Investigación.

El proceso penal acusatorio, como es sabido se desarrolla a través de diferentes etapas, y es en la fase de investigación cuando se realizan la mayor cantidad de diligencias periciales, mismas que serán evacuadas en su momento ante el Tribunal de Juicio, el Código Procesal Penal, regula la práctica de estas pruebas en fase de investigación indicando lo siguiente:

“Artículo 407. Participación en diligencias. Si la naturaleza de alguna diligencia a realizarse durante la etapa de investigación requiere la asistencia de expertos, el Ministerio Público llevará los peritos correspondientes. Las partes intervinientes también podrán asistir con sus peritos si lo consideran pertinente, siempre que hayan sido anunciados ante el Fiscal. En cualquier otro momento, serán nombrados por el Juez o Tribunal, a propuesta de parte. El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación.

Artículo 408. Nombramiento. La parte que aduzca la prueba pericial manifestará la materia o los aspectos sobre los que ha de versar el dictamen de los peritos y expresará a quién o quiénes designan para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo establecido para la práctica del peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer otro por su cuenta en reemplazo del designado o para que dictamine junto con él.

Artículo 409. Notificación. Antes de comenzar la pericia se notificará a las partes la orden de practicarla, salvo que sean sumamente urgentes.

Artículo 410. Función del perito. La autoridad que ordenó el peritaje resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales.

Los peritos personalmente estudiarán la materia del dictamen y están autorizados para solicitar aclaraciones de las partes, requerirles informes, visitar lugares, examinar bienes muebles o inmuebles, ejecutar calcos, planos, relieves y realizar toda clase de experimentos, que consideren convenientes para el desempeño de sus funciones.

Si algún perito no cumple con su función será reemplazado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Podemos indicar que la parte que aduzca la prueba pericial debe manifestar de manera precisa, la materia o los aspectos sobre los que ha de versar el dictamen de los peritos. El último articulado expuesto, faculta a los peritos en la práctica de la prueba y los autoriza ampliamente para lograr el mejor desempeño de sus funciones, ya que la prueba pericial se realiza con el objetivo de brindarles mayor claridad a los administradores de justicia, al momento de tomar sus decisiones.

Rendición del Informe Pericial.

Uno de los elementos fundamentales de la prueba pericial, es la rendición del dictamen luego de realizada la experticia, en el referido informe el perito debe cumplir con una serie de requerimientos establecidos en la ley procesal, veamos en qué consisten:

“Artículo 411. Contenido del informe pericial. Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el Tribunal, su dictamen será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, lo siguiente:

1. Una relación detallada de los elementos recibidos.
2. La identificación del problema objeto del estudio.
3. La motivación o fundamentación del estudio realizado, con indicación de las operaciones practicadas, el criterio científico aplicado si fuera el caso, las técnicas empleadas, los medios empleados y sus resultados.
4. Las observaciones de las partes o de los peritos de parte.
5. Las conclusiones que se formulen respecto de cada problema estudiado.

Los peritos procurarán practicar juntos el examen. Cuando exista diversidad de opiniones, deberán presentar su dictamen por separado.

El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan requerir la presentación oral, en la cual los peritos podrán ser examinados y repreguntados de la misma manera que los testigos.

No obstante, de manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y de sustancias estupefacientes o sicotrópicas podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si alguna de las partes lo solicitara fundadamente, la comparecencia del perito no podrá ser sustituida por la presentación del informe.” (Resaltado es nuestro)

Tal como se puede apreciar el perito debe ser cuidadoso al momento de redactar su informe pericial, el mismo debe presentarse por escrito, firmado y fechado, además las partes intervinientes en el proceso pueden preguntar y repreguntar a los peritos, con la finalidad de ampliar o esclarecer aspectos confusos del mismo, de ese sentido se aplica el principio procesal de contradicción.

Ratificación del Informe Pericial

El proceso penal acusatorio, está regido por el principio de la oralidad, eso conlleva que todos los intervinientes comparezcan preparados al momento de realizar sus intervenciones, a esa característica procesal el perito debe adecuarse, ya que las conclusiones periciales deben presentarse oralmente en el juicio; sin embargo, la normativa también le permite valerse de medios auxiliares (proyectores de audio, video, diapositivas) para hacer las respectivas explicaciones, a continuación presentamos lo expuesto por la normativa correspondiente.

“Artículo 413. Informe pericial. Los peritos presentarán sus conclusiones oralmente en el juicio, salvo en los supuestos previstos en el numeral 2 del artículo 379. Para ello podrán consultar sus informes escritos o valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas.

Artículo 414. Reglas de la declaración del perito en juicio. Después de juramentar e interrogar al perito sobre su identidad personal y las circunstancias generales, quien preside le indicará que exponga brevemente el contenido y las conclusiones de su pericia. A continuación podrá ser interrogado y contrainterrogado por las partes.

Artículo 415. Ampliación. Si alguna de las partes estimara que el dictamen pericial es insuficiente o contradictorio, podrá solicitar al Juez la ampliación por los mismos peritos, precisando los interrogantes aún pendientes de explicación, o que designe nuevos peritos.” (Resaltado es nuestro)

De las normas expuestas, podemos indicar que una vez expuestas las conclusiones de rigor, el presidente del tribunal de juicio oral, dirigirá el interrogatorio y contrainterrogatorio de los intervinientes.

Recusación de los peritos

Artículo 417. Recusaciones. Los peritos podrán ser recusados por las mismas causales y en la forma indicada para los jueces en los artículos 50 y 57 de este Código.

Podemos analizar de este artículo que los peritos pueden ser recusados por las mismas causas que los jueces en atención a los artículos 50 y 57 del Código Procesal Penal.

Principales Pericias en el Proceso Penal.

En atención a la ley 50 de 13 de diciembre de 2006 que reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá, y ley 69 de 27 de diciembre de 2007 que adscribe los servicios de criminalística de la policía nacional ha dicho instituto, podemos indicar que es la entidad encargada de brindar asesoría científica y técnica a la administración de justicia en lo concerniente al análisis, a la evaluación y a la descripción científica o médico-legal de los hallazgos y evidencias, por medio de sus servicios periciales, entre los cuales se distinguen los siguientes:

- **Pericia Médico Legal.**

La pericia médico legal se comprende como el examen, análisis, evaluación y pronunciamiento técnico y especializado de especialistas de la medicina, referente a evaluaciones externas realizadas a los entes intervinientes del proceso penal (imputado, víctima, auxiliares, entre otros).

Dichos especialistas son los encargados de: evaluar en todo su contexto partes y elementos corporales, lesiones traumáticas y sus secuelas, signos de negligencia física, toma de muestras biológicas, determinación de condiciones de salud, interpretación de documentación médica, determinación de signos clínicos patológicos, entre otras. (IMELCF, 2015, 12-20)

- **Pericia Odontológica Forense.**

La odontología forense es la rama de la odontología que trata del manejo y examen adecuado de la evidencia dental; así como también de la valoración y de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia.

Entre sus principales funciones tienen: evaluación de lesiones en la boca y sus secuelas, extracción de muestras en la cavidad oral, estimación de edad biológica, evaluación de huellas de mordeduras, identificación de personas, análisis e interpretación de documentación odontológica. (IMELCF, 2015, 21-23)

- **Pericia Psiquiátrica Forense.**

La psiquiatría forense se define como aquella rama de la medicina que estudia la conducta delictiva o evalúa la capacidad de comprensión de un hecho delictivo, por parte del imputado y su capacidad para determinar su conducta según esta comprensión, el estado mental de las víctimas de diferentes delitos, las necesidades terapéuticas, cuadros de dependencias a las drogas lícitas o ilícitas. (IMELCF, 2015, 24-26)

- **Pericia Psicológica Forense.**

La Psicología Forense es perfectamente procedente cuando se trate del análisis de la conducta,

comportamiento y personalidad del imputado o acusado; pero adicionalmente en múltiples ocasiones la prueba puede ser necesaria frente a otros intervinientes en el proceso, tal el caso de las víctimas o los testigos. (Pabón, 2006, 449)

Esta pericia tiene por objeto realizar: evaluaciones referentes a las secuelas emocionales que se presentan en relación al hecho, determinación de capacidad o condiciones mentales intelectuales y de personalidad.

- **Pericia en Trabajo Social.**

El Trabajo Social Forense es entendido, entre otras acepciones, como la especialidad que se focaliza en la interrelación entre el sistema jurídico y el sistema de servicios sociales, encontrando sentido toda vez que una dimensión legal se encuentra afectada o en litigio, no solo en el campo de la justicia, sino en todos aquellos aspectos sociales que comprenden al sujeto, entre otros la salud, la educación, el bienestar y/o el delito, sus principales funciones en el marco penal van en el sentido de realizar análisis de la estructura y dinámica familiar y estudios de las condiciones socio familiares. (IMELCF, 2015, 28-29)

- **Pericia Patológica Forense.**

La patología forense es una rama de la patología (el estudio de la naturaleza esencial de las enfermedades y de los cambios estructurales y funcionales) que trata de determinar la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver.

Los peritos específicamente realizan: examen del cadáver (necropsia), levantamiento del mismo, análisis de restos óseos, exhumaciones. (IMELCF, 2015, 30-31)

- **Pericias de Criminalística de Campo.**

La criminalística de campo se encarga de proteger, observar y fijar de manera gráfica, escrita y fotográfica el lugar de los hechos. El procedimiento se realiza a través de diferentes métodos de búsquedas para ubicar y recolectar, con las técnicas adecuadas, los indicios según su clase y naturaleza, los cuales posteriormente son remitidos a los laboratorios para su respectivo estudio.

El trabajo pericial de la sección de criminalística de campo da inicio a la cadena de custodia cuyo horizonte es garantizar la fidelidad, integridad, conservación e inalterabilidad de los diferentes elementos, los cuales podrán ser admitidos dentro del proceso por el juez y presentado en el juicio como medio de prueba.

Entre sus principales actividades consiste en: inspección técnica ocular a vehículos, el lugar de los hechos, análisis de revelado lofoscópicos (papilares), estudios técnicos de objetos incendiarios y artefactos explosivos. (IMELCF, 2015, 32-34)

- **Pericia en Identificación Criminal y Civil.**

La identificación criminal y civil, se realiza a través de peritos debidamente comprobados quienes a través de técnicas lofoscópicas analizan impresiones papilares de personas vivas y muertas, cotejo de rastros o fragmentos de huellas plantares, cotejo de impresiones digitales en documentos. (IMELCF, 2015, 34-37)

- **Pericia en Trazología Forense.**

A la trazología forense le compete el estudio de huellas de calzado y de neumáticos de vehículos a motor, mediante el cotejo de las mismas con los elementos de comparación suministrados para el análisis. Entre sus actividades realizan: análisis macroscópicos y comparativos de pisadas de calzados y neumáticos, estudios trazológicos. (IMELCF, 2015, 38)

- **Pericia en Balística Forense.**

Los peritos de la unidad de balística forense se encargan de examinar las armas de fuego remitida por las autoridades, establecen la trayectoria, dirección y distancia de disparo y determinan la relación entre proyectiles o casquillos ubicados en la escena. Restaura series en armas de fuego y vehículos, compara marcas de herramientas y mantiene una base de datos en el Sistema de Identificación Balística.

Sus pericias se basan específicamente en la comparación de casquillos y proyectiles, comparación de marcas microscópicas y macroscópicas, idoneidad del arma de fuego, restauración de armas de fuego, inspección ocular y recreación de hechos para determinar trayectorias de disparos, registro de armas en el sistema de identificación balística, entre otras. (IMELCF, 2015, 39-41)

- **Pericia Fotográfica Forense.**

La pericia fotográfica consiste en documentar fotográficamente el lugar de los hechos, estableciendo la ubicación de los indicios o evidencias preservando su posición original. Acude a solicitud de la autoridad competente, a inspecciones técnicas oculares; levantamiento de cadáveres; reconstrucción de hechos; captura imágenes de videos, cuerpos exánimes y lesiones personales. También realiza inmersiones subacuáticas. (IMELCF, 2015, 42)

- **Pericia en Documentología Forense.**

Esta pericia se encarga del análisis de manuscritos y firmas, permite identificar el autor de un texto manuscrito o de una firma, análisis de impresos con la finalidad de identificar su autenticidad o no, análisis de escrituras mecanografiadas para identificar si el texto fue escrito o no por una máquina de escribir determinada, análisis de sellos de goma o secos para identificar la autenticidad

o no de una impresión de los mismos, análisis de cheques para identificar si proviene de la misma fuente matriz de origen suministrado como elemento de comparación, análisis de protectografía para analizar impresiones hechas por medio de máquina franqueadora, análisis de documentos de identificación personal (cédula, pasaporte, licencia), para determinar la autenticidad o alteraciones, análisis de tarjetas de créditos, cheques viajeros, papel moneda para determinar su autenticidad, de igual forma se encargan de evaluar aspectos de propiedad industrial y derecho de autor, en términos generales se encargan de analizar todo lo referente a escrituras. (IMELCF, 2015, 43-48)

- **Pericia en Planimetría Forense.**

Los peritos de la sección de planimetría forense participan como auxiliares dentro del proceso de investigación, en aquellos hechos en que se desea establecer principalmente datos métricos (distancias, alturas, volúmenes, etc.).

Dentro de sus funciones tienen la de preservar, fijando en forma gráfica y métrica la escena del delito, ubicando objetos o estructuras en un sitio, además de los indicios y cualquier otro elemento de relevancia para la investigación, determinar distancias, volúmenes y áreas, realizar planos y diagramas, diligencias de reconstrucción, estudios técnicos topográficos. (IMELCF, 2015, 49-51)

- **Pericia en Accidentología Forense.**

La accidentología es el análisis, estudio, conocimiento y valoración del accidente y específicamente el accidente automovilístico como hecho de ocurrencia cotidiana que debe ser investigado y probado en juicio al comprometer bienes jurídicos como la vida, la integridad personal y el patrimonio, en aspectos tan sustanciales como la causa del accidente, quien lo produjo y la determinación de sus consecuencias. (Pabón, 2006, 581-582)

Pericialmente se dedican a realizar las siguientes actividades: recreación, reconstrucción e inspección ocular del lugar de los hechos, inspección física de los vehículos involucrados, estudio de la velocidad, distancia de reacción y frenado de los vehículos, animación y dinámica de un hecho de tránsito. (IMELCF, 2015, 52-59)

- **Pericia Morfológica Facial.**

La identificación de personas relacionadas con la comisión de delitos, personas desaparecidas, cadáveres de desconocidos, entre otras experticias que el sistema judicial requiera individualizar, es tarea de los peritos especializados en morfología forense.

Históricamente el uso de experticias o aproximaciones faciales como el reconocimiento fotográfico, el retrato hablado, las progresiones por edad, la reconstrucción y/o resaltación facial, análisis de tatuajes, han cumplido con objetivos investigativos importantes en la búsqueda de identidades que faciliten los procesos, cuando no exista otro recurso criminalístico que auxilie para

tal fin.

Como complemento de sus experticias, los morfólogos forenses se apoyan en los médicos forenses a través de los protocolos de necropsias y en los testimonios de las personas que acuden a solicitud de la autoridad competente, con la intención de identificar a través de imágenes fotográficas o editadas a los supuestos infractores o involucrados en un proceso investigado por el Ministerio Público.

En los casos de hallazgos de cadáveres de personas no identificadas o desaparecidas, se emplean diversas técnicas para lograr una aproximación facial. Todo esto, tomando en cuenta lo que rige la normativa activa judicial y las regulaciones administrativas institucionales vigentes. (IMELCF, 2018)

- **Pericia Informática Forense.**

La pericia informática genéricamente entendida se comprende como el examen y pronunciamiento técnico y especializado en todas las circunstancias, judiciales o extrajudiciales en donde esté involucrado un computador, ordenadores electrónicos, diagramas de flujo de la información, el manejo informático de datos, discos, cintas grabadas, sus sistemas, programas y aplicaciones.

Esta concepción comprende que el tradicional documento escrito simplemente es reemplazado por el soporte magnético y la firma o identificación indubitable y genuina de quien es el autor del documento, elemento esencial que expresa su conocimiento y la conformidad con su contenido, se considera que es sustituida por el código o clave asignado para ingresar al sistema. (Pabón, 2006, 587 – 588)

Sus principales actividades son: análisis y recuperación de información de medios de almacenamiento digital y masivos, rastreo y análisis de dirección e historial IP, análisis de sitios web, correos electrónicos, redes sociales, equipos para fraudes digitales y todo lo relacionado con la seguridad informática. (IMELCF, 2015, 63-66)

- **Pericia en Auditoría Forense.**

La exigencia de estas pericias se dará fundamentalmente en la investigación de delitos económicos, incluidos los delitos contra el orden económico y social —acaparamiento, especulación e infracciones contra el sistema financiero y contra el patrimonio económico -estafa y otras especies de fraude- así como a múltiples hipótesis de delitos contra el derecho de autor. (Pabón, 2006, 590)

- **Pericia Química Forense.**

Los peritos químicos forenses tienen como función realizar diferentes tipos de análisis para detectar, identificar, evaluar y comparar muestras, para así obtener resultados que puedan

proporcionar información valiosa a las investigaciones judiciales. Es el responsable de análisis de identificación de sustancias desconocidas, restos de explosivos, sustancias acelerantes y partículas provenientes de un arma de fuego; también realiza análisis comparativos de tierra, polímeros, tintas, pinturas, fibras, vidrio, papel; aunado a esto realiza inspecciones ambientales y análisis fisicoquímicos de aguas. (IMELCF, 2018)

- **Pericia Biológica Forense.**

Los biólogos forenses en la actualidad se encargan de realizar análisis y experticias: macroscópico y microscópico de elementos pilosos o tricológicos (pelos) para determinación de origen (pelo humano o animal) y determinación de área del cuerpo, estudio microscópico comparativo o cotejo de pelos, análisis microbiológicos de agua, para detectar presencia de coliformes fecales, como indicativo de aguas contaminadas, inspecciones relacionadas a casos contra los recursos naturales (delitos ambientales), contra la flora (deforestación o tala, quema, y tráfico de especies), contra la fauna (caza ilegal, tráfico de especies, identificación taxonómica, maltrato de animales), contra los recursos hídricos (contaminación por deposición de desechos sólidos, fuentes hídricas contaminadas, sedimentación etc.), recurso suelo (deposición de desechos sólidos, contaminación, etc.), análisis macroscópico y microscópico de fibras. (IMELCF, 2018)

- **Pericia Entomológica Forense.**

Los peritos entomólogos se especializan en realizar estudios a larvas o artrópodos de entomofauna cadavérica, para determinar el tiempo probable de muerte de una persona, su intervalo postmortem o identificación de posibles traslados del cuerpo. (IMELCF, 2015, 72)

- **Pericia Biomolecular.**

Los peritos biomoleculares se encargan de hacer análisis y pruebas físicas con espectros de luz forense, pruebas serológicas de semen, sangre u orina humana, pruebas de quimioluminiscencia para trazas o patrones de sangre, estudios parasitológicos y especialmente pruebas de ADN para identificación animal y humana. (IMELCF, 2015, 73-78)

- **Pericia en Sustancias Controladas.**

Los perito especiales en sustancias controladas se encargan del análisis, identificación, cuantificación y procesamiento de las mismas, entre las que destacan: sustancias narcóticas (sustancias capaces de provocar sueño, sedar e inhibir señales nerviosas asociadas al dolor (morfina, heroína), alucinógenas (sustancias que causan alteraciones profundas en la percepción del usuario) (LSD) y estimulantes (sustancias que producen un incremento de la actividad del Sistema Nervioso Central (cocaína, anfetamina).

Estas sustancias llegan en diferentes presentaciones, entre las que podemos mencionar: carrizos, sobrecitos, cigarrillos de fabricación casera, pastillas, medicamentos, comprimidos, courriers (servicio de entrega de paquetería y correspondencia inmediata), kilos provenientes de grandes incautaciones y los muy famosos camuflajes, los cuales pueden venir en ropa, maletas, adornos, plásticos, entre otros. (IMELCF, 2018)

- **Pericia Toxicológica Forense.**

La toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas puestas en interacción con los organismos y sistemas biológicos; comprendiendo específicamente los efectos nocivos o de alteración que aquellas ejercen sobre estos.

La pericia toxicológica se puede definir como la aplicación de los principios de la toxicología con el objeto de aclarar cualquier tópico, cuestión o duda que requiera un juicio o dictamen relacionado con ella. (Pabón, 2006, 575)

Dicha pericia se utiliza principalmente para determinar: presencia de drogas de abuso, medicamentos controlados, alcohol, plaguicidas, monóxido de carbono en personas vivas y muertas, análisis de presencia de sustancias químicas o tóxicas en muestras ambientales, animales, alimentos y bebidas. (IMELCF, 2015, 81-83)

Conclusión

Podemos concluir que en el proceso penal acusatorio, existe cierta discrepancias con respecto a la valoración jurídica de la prueba pericial, al momento del pronunciamiento jurisdiccional; sin embargo, aún se sostiene el criterio, que es el juzgador quien en el ejercicio de sus funciones realiza una fundamentación integral de los elementos procesales, sin llegar a una suplantación por parte del experto o perito, esto puede deberse, a que en el proceso penal, la decisión recae en tres juzgadores que componen el tribunal de juicio oral, a diferencia que en el proceso civil está en manos de un solo juzgador.

En el proceso penal, a pesar que la prueba pericial es fundamental, en la mayoría de los casos, la intervención de ésta se da por parte del ente investigador (Ministerio Público), ya que tiene a su disposición como brazo auxiliar al Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses, quien a pesar de trabajar como entes auxiliares uno para otro, sus dictámenes periciales gozan de la confianza respecto su objetividad profesional, de parte de los sujetos procesales que intervienen judicialmente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gabinete Pericial PJ GROUP. (2018). Perito Judicial, recuperado el 20 de noviembre de 2018, visible en: www.peritojudicial.com.

Guerra M, S. (2015). La Prueba: Columna Basal del Juzgamiento. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, visible en: <https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/la-prueba-columna-basal-del-juzgamiento-999142>

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.

Houed, M. (2007). La Prueba y su valoración en el proceso penal. Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Nicaragua.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). (2015). Directorio de Servicios Periciales. Punto Gráfico, S.A.

Machado Eschiaffino, C. (1999). Vademécum Pericial. Ediciones la Rocca, Buenos Aires, Argentina.

Mizrachi & Pujol, S.A. (2018). Código Procesal Penal de la República de Panamá. Editorial M&P.

Pabón, P. P. (2006). La Prueba Pericial, Sistema Penal Acusatorio. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Medellín, Colombia.

Parra Q, J. (1991). Tratado de la Prueba Judicial – La Prueba Pericial, Tomo V. Primera Edición. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia.

Peritos Judiciales Online. (2018) Peritos, recuperado el 21 de noviembre de 2018, visible en: www.peritos.online

Rodríguez, C. (2013). Intervención del Perito en el Juicio Oral. Revista Cathedra, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. (UMECIT).

Rodríguez, G. M. (2010). Manual Básico del Perito Judicial. Primera Edición. Librería Dykinson, Madrid, España.

Vázquez, C. (2015). De la prueba científica a la prueba pericial. Marcial Pons. Madrid, España.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO ESPECIALIDAD DE ESTUDIO JURÍDICO



Tiara Villarreal

Abogada Especialista en Contrataciones

Sub Dirección de Contrataciones del Municipio de Panamá

tiaravillarreal.legal@gmail.com

Fecha de recepción: 05/01/2019

Fecha de revisión: 11/02/2019

Fecha de aceptación: 25/03/2019

RESUMEN

En el presente artículo tratamos la importancia del estudio de las Contrataciones Públicas y el impacto de la corrupción en el desarrollo de las políticas públicas, y proyectos de Estado. Toda vez que, cada administración pública establece dentro de su plan de gobierno, proyectos de infraestructura de interés colectivo.

En ese sentido es necesario, que los ciudadanos puedan crear conciencia, que el primer fiscalizador de la gestión pública es él mismo. En ese mismo orden de ideas, debemos tomar en cuenta que, las contrataciones públicas en Panamá, han sido constantemente cuestionadas, debido a escándalos de corrupción, los cuales han tenido incidencia internacional, y que hace que obliga a los gobiernos a modificar las normas actuales en esta materia.

Los cambios a realizarse, deben contar con un estudio exhaustivo de las necesidades del mercado, aparejado con el principio de transparencia, que tanto cumplimiento debemos exigir.

Palabras clave: Estado, sociedad, contrato público, compra, adquisiciones públicas, corrupción, transparencia.

PUBLIC PROCUREMENT AS A SPECIALTY IN LEGAL STUDY

ABSTRACT

In this article we discuss the importance of the study of Public Procurement and the impact of corruption in the development of public policies, and state projects. Whenever, each public administration establishes within its government plan, infrastructure projects of collective interest.

In that sense it is necessary, that citizens can raise awareness, that the first public administration controller is himself. In the same order of ideas, we must take into account that, public contracts in Panama have been constantly questioned, due to corruption scandals, which have had an international impact, and which makes it necessary for governments to modify current regulations. in this matter.

The changes to be made must have an exhaustive study of the needs of the market, coupled with the principle of transparency, which we must demand so much compliance.

Key Words: State, society, public contract, purchase, public procurement, corruption, transparency.

ANTECEDENTES DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN PANAMÁ

Las Contrataciones Públicas dentro de nuestro país, fueron normadas inicialmente mediante la Ley 56 de 1995 con la cual se desvincula algunos trazos de procedimientos y la resolución de conflictos, que estuvieron contenidos en dispersas normas del Código Fiscal y del Código Administrativo, pero que al mismo tiempo se encontraba carente de un Procedimiento Administrativo General, que impusiera competencia en todas las entidades públicas y que solo nace para el año 2000, con la génesis de la Ley 38 de ese mismo año.

Sin embargo, lo que en un inicio produjo el carácter de compilación de normas en un solo instrumento jurídico, como fueron las IFIS y su movimiento de globalización, ahora serían impulsadas por una nueva corriente de Tratados de Bilateralidad entre Estados, que proclamaba cambios adicionales para la suscripción de aquellos.

Es así como el entonces presidente Martín Torrijos, designa una comisión para la adecuación de las normas en materia de Contrataciones Públicas, en consecuencia, es en el año 2006 mediante la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que se generan cambios sustanciales, entre las más importantes en materia de publicidad y transparencia, el Sistema Electrónico “Panamá Compra”, la creación de un ente independiente denominado Dirección General de Contrataciones Públicas, regulador de la operatividad y funcionalidad del engranaje relacionadas a las compras y ventas de bienes estatales.

No podríamos dejar de mencionar, que ante la imposibilidad de la que los conflictos de la Administración, pudiesen ser atendidas por juzgados o tribunales en sede judicial y sólo pudiese ser dirimido el conflicto por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se crea de

manera innovadora un Tribunal dentro de la Administración con independencia llamado Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas cuyo recursos son formales y atienden los conflictos desde una perspectiva distinta a la anterior por dilucidarse fuera de la entidad que emitía el acto administrativo en controversia, así las cosas, los empresarios se garantizarían un sistema oxigenado que resolvería los problemas desde la misma Administración y que permitiría entonces acceder a la sede judicial con posterioridad¹.

En su Marco Constitucional las contrataciones públicas emanan del artículo 266 de la Constitución Nacional, conforme a lo establecido en los convenios internacionales, el cual reza lo siguiente:

“ARTICULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor para el Estado y plena justicia en la adjudicación”. (el subrayado es nuestro)

En ese sentido las Contrataciones Públicas, juegan un rol importante en el desarrollo del Estado, toda vez que las perfectas utilidades de los fondos estatales son efectuadas mediante proyectos de infraestructura pública, y que los mismos deben ser ventilados de manera transparente, formando parte de las principales políticas públicas de los gobiernos.

Es por ello, que los gobiernos, han creado políticas de divulgación, de manera que se pueda cumplir con el principio de transparencia, que exigen las Naciones Unidas cumpliendo con los convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción la Convención Interamericana contra la Corrupción. y conforme con los estándares del mercado internacional.

Siendo la inversión en infraestructura pública, el 80% del producto interno bruto (PIB) panameño.

Panamá para cumplir con las exigencias internacionales en, materia de transparencia, ha creado leyes e iniciativas encaminadas a reforzar la ejecución transparente de los Actos Públicos,

¹ Extracto del libro “El Contrato de Obra”

Tiara Villarreal. (2018). El Contrato de Obra en las Contratación Pública. Panamá: Barrios & Barrios.

ejemplo de ellos el portal electrónico de “Panamá Compra” y la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura- CoST Panamá impulsada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y a la cual se han incorporado varias entidades. En su mayoría de las iniciativas de transparencia cuentan con el apoyo de organismos internacionales, cumpliendo con las normas y convenios internacionales de los cuales Panamá es signatario, cumpliendo con su rol en la lucha contra la corrupción.

POSICIÓN DE PAISES DE LATIIONÁMERICA EN EL INDICE DE CORRUPCIÓN



Fuente: Transparencia Internacional.

NORMAS QUE RIGEN LA TRANSPARENCIA EN PANAMÁ

1. Ley 15 de 2005 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
2. Ley 42 de 1998 que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción.
3. Decreto Ejecutivo 246 del 15 de diciembre de 2004 que dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central de la República de Panamá.
4. Ley 33 del 25 de abril de 2013 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
5. Ley 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones, o Ley de Transparencia.

Panamá, en cumplimiento con su rol en la lucha contra la corrupción, contemplo en el Código Penal el cual establece lo siguiente en su capítulo noveno denominado “*Fraude en los Actos de Contratación Pública*” lo siguiente:

Capítulo IX

Fraude en los Actos de Contratación Pública

Artículo 364. *Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multa quien:*

1. *Se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública.*
2. *Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación pública.*
3. *Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño.*
4. *Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo o de un tercero.*
5. *Se concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública.*

Artículo 365. *El servidor público que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior será sancionado con prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días-multa y con inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.*

Siendo entonces, un delito aquellos fraudes cometidos por los funcionarios responsables de las contrataciones públicas, así como lo establecido dentro del delito de Corrupción de Servidores Públicos, para aquellos proveedores que incurran en sobornos a funcionarios.

No obstante, aun existiendo normas que sancionan la corrupción, vemos como funcionarios caen en este delito.

Por otro lado, debo mencionar que el problema de la corrupción, más allá de los sobre costos, está en aquel funcionario que para la agilización de un trámite o la adjudicación de un Acto Público recibe dineros por parte del proponente o contratista.

En ese sentido, soy de la opinión que la “moral” del servidor público que ejerce funciones dentro del proceso de contrataciones públicas, es de suma importancia, para que la transparencia en un acto público o contrato se dé eficazmente. Es por ello que el funcionario que ejerza este tipo de cargo público debe contar con ética y moral comprobada, de manera que se tenga certeza del nivel de honestidad con la que se manejen los Actos Públicos.

En ese mismo orden de ideas, debo concluir en que la responsabilidad del estudio de las contrataciones públicas no solo recae en el funcionario que ejerza funciones en esta materia, sino de cada ciudadano responsable, que paga impuestos y que participa en la vida política del país de manera que seamos los principales fiscalizadores de la efectiva y transparente ejecución de los fondos del aerarium² panameño y que son materializados mediante proyectos de inversión e infraestructura pública.

² En la antigua Roma el aerarium (erario en el español moderno) era el nombre que se daba al tesoro público, obtenido mediante la recaudación de los impuestos. Su sede se encontraba en el Templo de Saturno en la colina del Capitolio, por lo que comúnmente recibía el nombre de Aerarium Saturni. Wikipedia. (2019). Aerarium. agosto 2, 2019, de Wikipedia Sitio web: <https://es.wikipedia.org/wiki/Aerarium>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Mundial. (2014). Informe del Banco Mundial: Los datos y las mediciones son fundamentales para poner fin a la pobreza extrema. julio 24, 2018, de Grupo Banco Mundial Sitio web: <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/10/09/measurement-fundamental-ending-extreme-poverty-world-bank-report>
- CoST- Panamá. (2017). Estudio de Alcance. Panamá: Deloitte
- Jimmy Bolaños González. (2010, enero- junio). Bases conceptuales de la rendición de cuentas y el rol de las Entidades de Fiscalización Superior. Revista Nacional de Administración, 1, Pp.109-138.
- Tiara Villarreal. (2018). El Contrato de Obra en las Contratación Pública. Panamá: Barrios & Barrios.
- World Bank Institute, GOPAC. (2013). Rendición de Cuentas Gubernamental y Fiscalización Legislativa: Routledge.

NORMAS CITADAS:

- Ley 15 de 10 de mayo de 2005. Por la cual se aprueba la convención de las naciones unidas contra la corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003. Gaceta Oficial: 25296 Publicada el: 11 de mayo de 2005.
- Ley 42 de 1 de julio de 1998. Por la cual se aprueba la convención interamericana contra la corrupción, suscrita en caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. Gaceta Oficial: 23581 Publicada el: 08 de julio de 1998.
- Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004. Por el cual se dicta un código uniforme de ética de los servidores públicos que laboran en las entidades del gobierno central Gaceta Oficial: 25199 Publicada el: 20 de diciembre de 2004.
- Ley 33 de 25 de abril de 2013, Que crea la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información. Gaceta Oficial No 27275-A de 26 de Abril de 2013.
- Ley 6 de 22 de enero de 2002. que dicta normas para la transparencia en la gestión publica establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones. Gaceta Oficial: 24476 Publicada el: 23 de enero de 2002.

NORMAS PARA AUTORES

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citados son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA

1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

3. Artículos teóricos: son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

Other cited rules are the following:

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B., and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

1. Articles: they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

2. Essays: It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

3. Theoretical articles: they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

WORK DELIVERY GUIDELINES

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

PRIVACY STATEMENT

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

OPEN ACCESS POLICY

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

IMPORTANT: In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

COPYRIGHT: Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA
254-1141**

**SEDE CHITRÉ
996-4260**

**SEDE SANTIAGO
998-0363**



www.umecit.edu.pa

revistas.umecit.edu.pa

[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)